

Better Advocacy for Better Inclusion

**Acciones contra la discriminación,
para la igualdad
y los derechos de ciudadanía**



Co-funded by
the European Union

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Credits

Better Advocacy for Better Inclusion. Acciones contra la discriminación, por la igualdad y los derechos de la ciudadanía ha sido producido en el marco del proyecto Better advocacy for Better Inclusion (BABI) financiado por el programa Erasmus + . El proyecto está liderado por Lunaria (Italia) en colaboración con Antigone-Information documentation centre on racism, ecology, peace and non violence (Grecia), Sos Malta (Malta) y Sos Racisme Catalunya (España).

Este documento refleja únicamente los puntos de vista de los autores, y la Comisión Europea no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en él.

El manual es un trabajo colectivo de Paola Andrisani, Grazia Naletto, Roberta Pomponi, (Lunaria), Adria Alcoverro, Martina D'Ottavio, Effie Gelastopoulou, Ioanna Mitsika, Sofia Stefanidou (Antigone-Information documentation centre on racism, ecology, peace and non violence), Edo Bazzaco (Sos Racisme), Alexander Hili (Sos Malta). Traducción y edición al inglés por Roberta Pomponi (Lunaria).

Índice

3 Introducción

5 **PARTE 1.**

Incidencia Política: algunas cuestiones teóricas

6 1.1. Los conceptos de incidencia e incidencia política

9 1.2. Diferentes enfoques teóricos sobre la incidencia política

14 1.3. Retos: ONGs, movimientos sociales y participación

17 **PARTE 2.**

Incidencia política antirracista. Resultados de una encuesta cualitativa en cuatro países europeos

18 2.1. Movimientos antirracistas en Italia, España, Grecia y Malta. Similitudes y diferencias

22 2.2. Metodología

24 2.3. Acting in a context of institutional and structural racism

26 2.3.1 Racismo institucional

39 2.3.2. Racismo estructural

51 2.4. From participation to leadership

59 **PARTE 3.**

Experiencias en incidencia política impulsadas por inmigrantes, refugiados, ONG y movimientos sociales en cuatro países europeos. Algunos ejemplos

60 **SPAIN**

60 **#RegularizaciónYa [#RegularizationNow]**

63 **Comunidad Negra Afrodescendiente y Africana - CNNAE** **[Afro-descendant and African Black Community]**

65	Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes [People's Union of Street Vendors]
67	Parad de Pararme [Stop Stopping me]
69	Fruita amb Justicia Social [Fruit with Social Justice]
71	Stop Racisme Lloguers [Stop Racism in Housing Rentals]
73	ITALIA
73	ItalianiSenzaCittadinanza [Italians without Citizenship]
76	ASGI - Association for Legal Studies on Immigration [Anti-Discrimination Group]
79	Trama di Terrec[Plot of lands]
82	MEDU- Doctors for Human Rights
85	CSA EX CANAPIFICIO
88	Association 21 July
90	GREECE
90	Squat – Housing support for refugees in Athens
92	Lesvos Solidarity
94	Generation 2.0
96	Intercultural High School of Evosmos
98	MALTA
98	GWU [General Workers' Union]
100	St Jeanne Antide
102	Bibliografia

Introducción

En los últimos años, las migraciones y la presencia de ciudadanos de origen extranjero en las sociedades europeas han estado en el centro del debate público, inspirando intervenciones de instituciones locales, nacionales y europeas. Las crisis internas de algunos países del norte de África en 2011, la crisis humanitaria ligada al conflicto sirio en 2015, el crecimiento de las llegadas de migrantes por mar registradas entre 2015 y 2017, primero en el Mediterráneo Oriental y luego en el Mediterráneo Central, junto con los numerosos atentados llevados a cabo en Europa por grupos atribuibles al radicalismo islámico, han definido un escenario en el que la hostilidad y la intolerancia hacia los ciudadanos extracomunitarios y de origen extranjero ha influenciado el debate público y ha condicionado, más o menos directamente, las políticas nacionales y de la UE en materia de migración y asilo. Se ha asumido el “control” y la “contención” de la migración como objetivos prioritarios. Esto, por un lado, ha incrementado políticas públicas destinadas a “proteger” las fronteras y costas de Europa y, por otro lado, ha reducido la puesta en marcha de intervenciones de emergencia para la acogida de inmigrantes recién llegados. Como consecuencia, la implementación de estas políticas a menudo ha dado lugar a graves violaciones de los derechos humanos.

Es en este contexto las iniciativas de los migrantes, refugiados, jóvenes descendientes de la inmigración y las organizaciones de la sociedad civil se han multiplicado en muchos países europeos. Estas iniciativas buscan incitar un cambio cultural, social y político en las maneras en que la sociedad europea enfrenta los fenómenos y procesos que, desde hace décadas, la han transformado en una realidad plural y multicultural.

El lanzamiento de misiones de búsqueda y rescate de migrantes en el mar por parte de organizaciones no gubernamentales, la creación de espacios y proyectos de acogida generalizada (muchas veces autogestionados); la solidaridad construida desde la sociedad civil para asegurar la garantía de los derechos sociales comenzando por los de salud y educación, el trabajo enfocado a cambiar y reorientar las representaciones mediáticas de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, hasta la promoción de acciones judiciales contra formas de

racismo institucional y campañas para modificar la legislación sobre ciudadanía, inmigración y asilo o exigir el fin de las relaciones diplomáticas con terceros países que no aseguren la garantía de los derechos humanos (como Turquía y Libia): son solo algunos de los ámbitos en los que asociaciones, grupos informales, coaliciones, redes y movimientos sociales han incidido en los últimos años; para llenar el vacío dejado por las instituciones o para solicitar (o impedir) su intervención.

Muchas de estas iniciativas podrían enmarcarse en lo que parte de la literatura internacional describe como acciones de incidencia política (“policy advocacy”). Aunque en muchos casos, especialmente a la hora de presionar a las instituciones, no se hayan logrado los resultados esperados.

Por todo lo expuesto, el objetivo de este manual es proponer una reflexión que parte de nociones teóricas básicas sobre la incidencia política (Parte 1). A esto se le suma el análisis de los resultados del material empírico recabado (Parte 2) para proporcionar sugerencias útiles para estructurar mejor las iniciativas de incidencia que tienen como objetivo fomentar la igualdad, la justicia social, un nuevo modelo de ciudadanía y la gestión de la migración, así como para luchar contra la discriminación, la xenofobia y el racismo. La última parte presenta algunos ejemplos concretos movimientos de incidencia impulsados en España, Italia, Grecia y Malta (Parte 3).

PARTE 1.

Incidencia Política: algunas cuestiones teóricas

1.1. Los conceptos de incidencia e incidencia política

Es útil detenerse en la definición del concepto de incidencia (“advocacy”) e incidencia política (“policy advocacy”).

Este es un concepto heredado de la cultura anglosajona, especialmente americana, que se utiliza para definir la existencia de una sociedad civil europea estructurada, aunque con expresiones y formas muy distintas.

El origen etimológico de la palabra ‘advocacy’ (del latín *advocare*) remite tanto a la idea de defensa (abogacía) como a la de buscar ayuda. En inglés, este significado va asociado a aquellos conceptos referentes al apoyo, la peroración o el reclamo. Podríamos decir que, desde sus orígenes, la palabra ‘advocacy’ implica la existencia de alguien que defiende, apoya, reclama o incide en nombre de otra persona. Y en esto último radica, tal como veremos, uno de los límites para su práctica, cuando esta radica en iniciativas que ponen en el centro de su lucha la reivindicación y garantía de los derechos, y que proporcionan los medios de participación y el protagonismo de las personas directamente afectadas.

La literatura académica estadounidense y canadiense ha estudiado acciones de incidencia política impulsadas por organizaciones sociales con el objetivo, por un lado, de brindar un sólido sustento teórico para la definición de estas estrategias y, por otro, de analizar su trabajo y puntos críticos. Otra contribución analítica se ofrece des del trabajo realizado por algunas organizaciones estadounidenses sin ánimo de lucro. A continuación, reconocemos algunas definiciones de incidencia política (‘policy advocacy’).

La incidencia política se define como:

“un proceso estratégico y creativo para influir en las políticas, prácticas y actitudes que afectan la vida de las personas”;¹

“El proceso deliberado de influir en quienes toman decisiones sobre el desarrollo, la modificación e implementación de políticas”;²

“a un conjunto de actividades organizadas y diseñadas para influir en las políticas públicas y decisiones de quienes están en el poder con la finalidad de lograr un cambio positivo y duradero”;³

1 Ruppert A, Wahlgren J, *Advocacy Handbook Refugees’ access to higher education and beyond*, 2018.

2 Care International, *The Care International Advocacy handbook*, 2014.

3 Costanza de Toma, *Advocacy Toolkit, Advocacy Toolkit. Guidance on how to advocate for a more enabling environment for civil society in your context*, Open Forum for CSO Development Effectiveness 2020.

“un proceso estratégico y deliberado para generar cambios en políticas y prácticas. Puede ocurrir a nivel local, nacional, regional e internacional, y es una estrategia que busca lograr un cambio integral mediante una actividad coordinada a todos los niveles.”⁴

Según De Santis “la incidencia en políticas sociales consiste en los esfuerzos intencionales de las OSL (Organizaciones sin ánimo de lucro, ed) para cambiar políticas gubernamentales existentes o hacer propuestas en nombre de o con grupos de personas marginadas.”⁵

Las definiciones expuestas anteriormente se centran en acciones diseñadas para influir, directa o indirectamente, en las decisiones de los representantes y poderes públicos.

De ahí la atención que le dedican algunos académicos a la definición de ‘incidencia política’ identificada como el conjunto de “actividades intencionales promovidas por grupos privados para incidir en el proceso de elaboración de políticas”;⁶ “incidencia dirigida a cambiar políticas o regulaciones que afectan la práctica o el bienestar de un grupo” o como “cualquier intento de influir en las decisiones de cualquier élite institucional en nombre de un interés colectivo.”⁷

Reid propone una definición más amplia, intentando ejemplificar diversas iniciativas de incidencia de una manera más descriptiva: “las acciones de incidencia pueden incluir actividades de sensibilización e influencia de la opinión pública; investigación para interpretar problemáticas y sugerir soluciones; acciones constituyentes y movilizaciones públicas; propuesta de un agenda pública y diseño de políticas; ‘lobbies’; implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas; y actividades relacionadas con procesos electorales. Sin embargo, no existe un consenso generalizado sobre qué actividades constituyen la ‘incidencia’ (‘advocacy’) y ninguna fuente ofrece una descripción comprensible de los diversos tipos de actividades y estrategias que utilizan distintos grupos para ejercer una influencia en el proceso de formulación de políticas públicas.”⁸

4 Civicus and others, *Advocacy toolkit influencing the post-2015 development agenda*, 2015.

5 De Santis G., “Voices from the Margins: Policy Advocacy and Marginalized Communities” in *Canadian Journal of Nonprofit and Social Economy Research*, Vol. 1, No 1 Fall / Automne 2010 pp. 23 – 45.

6 Gen, S. & Wright, A. C. (2018). *Strategies of policy advocacy organizations and their theoretical affinities: Evidence from Qmethodology*. *Policy Studies Journal*, 46 (2), 298-326.

7 Mosley J., *Recognizing New Opportunities: Reconceptualizing Policy Advocacy in Everyday. Organizational Practice*, 2013 in *Social Work*, Volume 58, Issue 3, July 2013, Pages 231–239.

8 La definición puede encontrarse en Gen, Sheldon and Wright, Amy Conley, “A framework for policy advocacy” (2012). *Faculty of Social Sciences - Papers*. 955. pp. 4-5.

Esta última definición, al menos tiene el mérito de incluir tanto iniciativas que buscan cambiar la política pública a través de la interlocución o la colaboración directa con los representantes públicos que toman las decisiones, como iniciativas que buscan el cambio desde abajo, a través de la movilización pública, la presión mediática y el conflicto social.

De manera similar, MacIndoe distingue entre incidencia política formal, identificada con el ‘loobying’ directo, el ‘loobying’ administrativo, la formación de coaliciones, la incidencia judicial y el testimonio de expertos, y la incidencia con grupos de base social, identificada con el ‘loobying’ de base, eventos públicos, educación o sensibilización pública o divulgación en los medios.⁹

La elaboración de una definición operativa de incidencia política aplicable al contexto europeo, con referencia específica a las actividades promovidas en el ámbito de la migración, el asilo y la lucha contra el racismo, requiere un estudio en profundidad de al menos tres aspectos.

El primero se plantea según la necesidad de adoptar un **enfoque sistémico**, hasta ahora generalmente soslayado por los actores institucionales, que reconoce la existencia de dos cuestiones relacionadas. La conexión que existe entre la evolución de las políticas migratorias por un lado, y el afianzamiento de la xenofobia y el racismo por el otro. El segundo sucede entre la difusión de diferentes formas de discriminación, xenofobia y racismo (también institucional), la escasez o ineficacia de políticas de “inclusión social” y ciudadanía para personas migrantes y racializadas adoptadas a nivel nacional y local y, por último, el nivel de participación directa y proactiva de las personas migrantes, refugiadas y de origen extranjero en el diseño e implementación de estas políticas.

Un segundo tema relevante se refiere al origen de las iniciativas de incidencia política y el proceso mediante el cual se definen y se desarrollan. Uno de los temas importantes destacados en la literatura sobre las iniciativas de incidencia política impulsadas por organizaciones sin ánimo de lucro tiene que ver con el desafío democrático que implican: ¿reflejan o no las prioridades de las personas a las cuales dicen representar?¹⁰ Esta pregunta es particularmente pertinente cuando nos referimos a las iniciativas de incidencia política promovidas en el ámbito de

9 MacIndoe H., *How Competition and Specialization Shape Nonprofit Engagement in Policy Advocacy*, Nonprofit Policy Forum 2014.

10 Véase en particular: Mosley, J. *Recognizing New Opportunities: Reconceptualizing Policy Advocacy in Everyday. Organizational Practice*, (2013) Social Work. 58: 3 231–239 e De Santis G., *Voices from the Margins: Policy Advocacy and Marginalized Communities*, in Canadian Journal of Nonprofit and Social Economy Research, Vol. 1, 2010.

la migración y la lucha contra el racismo, donde nuevas subjetividades autoorganizadas parecen estar emergiendo en algunos países europeos, como por ejemplo en Italia y España, y que evalúan críticamente el trabajo histórico del movimiento antirracista.

La tercera cuestión hace referencia a la teoría o visión del cambio que aspira conseguir, relacionado con la lectura que se hace del sistema social, económico y político vigente. Si se asume, por ejemplo, que la xenofobia y el racismo son fenómenos estructurales que conducen a formas de discriminación institucional, definiciones de incidencia política que reconocen únicamente iniciativas dirigidas a los decisores públicos y dejan de lado iniciativas de ayuda mutua, de autoorganización y de movilización social, podrían resultar obsoletas e ineficaces. Por otro lado, debemos recordar que los mismos sistemas y mecanismos de participación abierta (muchas veces únicamente “otorgada”) por parte de las instituciones, pueden a su vez reproducir, según como se estructuren, formas de exclusión y discriminación.

Considerando estas complejidades y las limitaciones de las definiciones anteriormente mencionadas, la definición operativa de incidencia política que proponemos aquí es la siguiente:

“Policy advocacy is the set of activities and initiatives promoted by civil society organizations and those constituted by people with a migrant background aimed at influencing and redirecting public policies at the local, national or European level, towards the prevention and combating of discrimination and institutional racism on the one hand and the promotion of civil, social and political citizenship rights on the other, thanks to the direct participation of people with a migrant background, discriminated or “racialized” people and social movements in their definition.”

1.2. Diferentes enfoques teóricos sobre la incidencia política

Los actores sociales que impulsan iniciativas de incidencia política están interesados en producir un cambio social capaz de impactar positivamente en la vida de las personas, pero la visión política del contexto en el que actúan, así como las estrategias y acciones elegidas, pueden ser muy distintas. Las diferentes interpretaciones de actores sociales e instituciones sobre la relación entre política y sociedad, y distintas concepciones de la forma en que se puede desencadenar un proceso de cambio, puede llevar a la adopción de estrategias de incidencia política muy diferentes.

La literatura ha identificado distintos modelos de incidencia política desarrollados en organizaciones sociales tratando así de identificar los distintos tipos de relaciones que existen entre algunos de sus elementos constitutivos:

- las teorías del cambio en las que se basan,
- las estrategias de incidencia política que siguen,
- los impulsos que los originan
- las acciones en las que se estructuran,
- los interlocutores escogidos,
- los objetivos perseguidos y los resultados deseados.¹¹

Podemos distinguir principalmente entre tres enfoques teóricos acerca del cambio social.

El primero se inspira en el **institucionalismo**, que identifica la capacidad de influir y reconducir las decisiones políticas de los decisores públicos como motor del cambio social. En este caso, las iniciativas de incidencia política van dirigidas directa o indirectamente a los responsables políticos europeos, nacionales o locales, con el objetivo de cambiar/reorientar las políticas públicas.¹²

Un segundo enfoque, que podríamos definir como **cultural**, identifica el motor de cambio en el cambio de imaginarios colectivos. En este caso, las acciones de incidencia política van dirigidas al mundo de la cultura y a los medios, a los formadores de opinión y a la opinión pública, y tienen como objetivo lograr un consenso amplio de apoyo a una agenda política específica, acompañado de narrativas, estudios y artículos políticos destinados a demostrar la validez del problema identificado y de las soluciones propuestas eventualmente para resolverlo.¹³

Un tercer enfoque se inspira en la teoría de la justicia social. Este enfoque sitúa el protagonismo y la participación directa de las personas afectadas por diferentes formas de desigualdad al centro de cualquier cambio político y social.¹⁴ Los sujetos sociales que se inspiran en este enfoque teórico tienden a desarrollar un análisis profundo y crítico del contexto político, económico y social existente.

11 Véase en particular la contribución de McIndoe (2002), Gen (2018) and De Santis (2012) mencionado anteriormente.

12 Esto incluye iniciativas para la reforma de la ley de ciudadanía y las normas que rigen la entrada y estancia de inmigrantes en los países europeos; campañas por el cierre de los centros de detención y campamentos gitanos, por la transparencia de políticas públicas, por la correcta aplicación de las normas existentes que rigen el acceso de los ciudadanos extranjeros a los sistemas de bienestar y al mercado laboral, acciones estratégicas contra la discriminación.

13 Esto incluye iniciativas de comunicación, auto-narración y contra-narrativas, así como acciones dirigidas a cambiar la relación de los principales medios de comunicación con los migrantes y las minorías que son más vulnerables a la discriminación

14 Reisch M., “Defining Social Justice in a Socially Unjust World”, in *Families in Society: The Journal of Contemporary Human Services*, 2002 Volume 83, Number 4.

Consideran el racismo como un fenómeno estructural. La participación puede manifestarse de diferentes formas: protesta conflictiva; autoorganización, estructuras de ayuda mutua y de autogestión, buscando construir el cambio social desde la base social; o una confrontación crítica con las instituciones a través de iniciativas y participación directa de los sujetos que reivindican sus derechos.¹⁵

Teniendo en cuenta estos tres modelos principales de referencia, pueden identificarse diferentes **estrategias de incidencia política**. Estas son, por un lado, las estrategias **formales** de incidencia política, que prioritariamente se dirigen a los responsables públicos de la toma de decisiones y apuntan hacia el cambio de políticas públicas, incluyendo acciones de ‘lobbying’, partenariados con instituciones, la creación de campañas/coaliciones y la promoción de acciones legales estratégicas. Y, por el otro, las estrategias de **incidencia política de base social**, que incluyen diversas formas de movilización pública, sensibilización, campañas en los medios, y la construcción de iniciativas y experiencias sociales autoorganizadas.

Las acciones de ‘lobbying’ se dirigen principalmente a los representantes que formulan políticas públicas y con quienes se buscan establecer una relación directa para influir en sus decisiones. El énfasis está en participar en el proceso formal de elaboración de políticas públicas. El ‘lobbying’ es por definición una estrategia elitista (realizada por y dirigida a élites) que puede involucrar, aunque por lo general no lo hace, a las comunidades sociales de referencia y no requiere intervenir en la opinión pública.

Los partenariados institucionales persiguen cambios en políticas públicas mediante el estableciendo colaboraciones (como, por ejemplo, participando en mesas de trabajo/comités/reuniones) con instituciones gubernamentales.

La presión indirecta sobre los decisores públicos pretende incidir en sus decisiones de manera indirecta, a través de la constitución de coaliciones o campañas que influyen en la opinión pública y los medios de comunicación, generando conciencia sobre formas alternativas de intervención llevadas a cabo en el territorio.

Las acciones judiciales estratégicas o las acciones dirigidas al aparato administrativo de las instituciones intentan provocar directamente un cambio de política sin afectar la función legislativa.

15 Entre las iniciativas de incidencia de este tipo, podemos incluir las diversas formas de manifestaciones públicas; la creación de espacios autogestionados de escucha, socialización, acogida; servicios de asistencia y orientación social y jurídica; denuncia pública de violaciones de derechos y discriminación; redes de solidaridad destinadas a garantizar el acceso a la educación, el aprendizaje de idiomas, acogida en familias; experiencias autogestionadas de economía alternativa; peticiones, cartas abiertas denunciando violaciones al derecho de asilo y derechos humanos en las fronteras

El **activismo social** tiene como objetivo influir en la opinión pública con el fin de construir un consenso generalizado que induzca al cambio político y social, centrándose en la participación directa de las personas y grupos afectados por la desigualdad/discriminación.

Las prácticas de autoorganización y autogestión buscan promover formas de mutualismo social que puedan responder directamente, en sí mismas, a las necesidades sociales (derecho a la vivienda, acogida autogestionada, puestos de salud popular, etc.).

En el origen de iniciativas de incidencia política, a menudo podemos encontrar procesos de detección de necesidades y solicitudes individuales en las acciones de prestación de ciertos servicios (legales, sociales, médicos); crisis o eventos traumáticos que han afectado a una comunidad (ataques racista, violaciones de derechos humanos en centros de detención, la llegada repentina de un gran número de solicitantes de asilo a un determinado territorio, etc.) o necesidades colectivas, relacionadas con las acciones de individuos, organizaciones o movimientos sociales (como por ejemplo, la defensa de un espacio ocupado).

Construir redes y coaliciones, movilizar la opinión pública, presionar en los medios de comunicación, el seguimiento de las políticas y el debate público, la realización de investigaciones, procesos judiciales, la organización de eventos culturales o movilizaciones públicas y la participación de los responsables políticos comprenden las diversas **acciones** que se pueden promover mediante iniciativas de incidencia política.

La concepción y desarrollo de una iniciativa de incidencia política involucra varias fases de trabajo que se estructuran en el llamado Ciclo de Incidencia ('Advocacy Cycle'). Varias organizaciones han desarrollado manuales dedicados a las acciones de incidencia política con el fin de hacer más efectivas sus iniciativas, proponiendo articulaciones y análisis más o menos complejos del ciclo de la incidencia. Los pasos esenciales, efectivamente resumidos por Care International en el siguiente cuadro, son los siguientes.

- 1 Definición del problema
- 2 Análisis de contexto
- 3 Definición del objetivo
- 4 Identificación de actores que pueden generar cambios
- 5 Formulación de preguntas relacionadas con políticas públicas y mensajes clave
- 6 Análisis de los recursos internos y externos disponibles
- 7 Plan de acción e implementación
- 8 Monitoreo y evaluación

The Advocacy Planning and Implementation Cycle



Source: CARE, *The International Advocacy Handbook*, 2014, p. 7

Una definición precisa del Ciclo de Incidencia Política permite la planificación estratégica de iniciativas y la identificación temprana de cualquier vacío u obstáculo para su implementación efectiva. El análisis del contexto externo, por un lado, y de la situación interna del grupo/organización, por el otro, puede, de hecho, resaltar algunos elementos de debilidad.

En general, los momentos de crisis económica y financiera, caracterizados por políticas de austeridad y contención del gasto público y concepciones cada vez más selectivas del bienestar, exponen a los sujetos sociales a ciertos **riesgos** específicos.¹⁶ La estrechez de los recursos disponibles tiende a crear un ambiente competitivo entre las diversas organizaciones, hecho que puede dificultar la construcción de coaliciones fuertes dentro la sociedad civil dotadas de una autonomía sólida. La creciente implicación de organizaciones sociales en la gestión y prestación de servicios sociales puede aumentar su **dependencia en instituciones** y, por tanto, limitar su independencia para formular demandas políticas. La participación en espacios puede fomentar mecanismos de consulta y cooptación que incrementen la lejanía entre el liderazgo de las organizaciones/movimientos y sus referentes sociales.

Algunos de los posibles antidotos, útiles para frenar estos riesgos, son: el cuidado en los procesos democráticos internos; la creación de espacios físicos y virtuales, formales e informales, de escucha, debate y participación; un cambio periódico de roles, asignaciones y responsabilidades; el mantenimiento de una fuerte cohesión interna y una identidad colectiva junto con una comunicación in-

¹⁶ Mosley J. (2013) cit.

terna fluida y sistemática, capaz de aprovechar al máximo las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías.

1.3. Retos: ONGs, movimientos sociales y participación

Independientemente de las estrategias escogidas, la democracia y la participación son dos principios básicos que deben orientar las iniciativas de incidencia política impulsadas por organizaciones y movimientos sociales que se mueven en un horizonte de mayor justicia social.¹⁷ En el día a día de los movimientos y organizaciones de base autoorganizados o en organizaciones más pequeñas es más fácil asegurar la participación. Por el contrario, en organizaciones más grandes y complejas la construcción de caminos participativos requiere un mayor cuidado, particularmente cuando el objetivo es emprender iniciativas y campañas para combatir las desigualdades sociales, la discriminación y el racismo. El quid de la cuestión tiene que ver con el nivel y las formas de implicación de los grupos de personas directamente afectados por la desigualdad y la discriminación, independientemente de que apunten al cambio social, al cambio cultural o al cambio de políticas públicas. Si bien los factores que dificultan la participación de las personas directamente afectadas en las iniciativas incidencia política están bien investigados, el estudio de los factores que pueden contribuir a incidencia no se ha explorado tan a fondo.¹⁸

Entre los factores que dificultan la participación, se han identificado **obstáculos subjetivos** (problemas materiales relacionados con la supervivencia diaria, falta de tiempo, nivel de educación o experiencia cívica); **obstáculos organizativos** (falta de personal o activistas dedicados a fomentar la cohesión interna, concentración de tiempo y recursos en la prestación de servicios más que en la participación polí-

17 Lombardi E., Messina A., Polimanti O., *Lavorare bene. Manuale sull'organizzazione e le forme di lavoro nel terzo settore (Working well. Handbook on organization and forms of work in the third sector, ed)*, Edizioni lavoro, 1999;

18 Véase: De Santis, 2010, cit; Lo Schiavo L., *Immigrazione, cittadinanza, partecipazione: le nuove domande di inclusione nello spazio pubblico. Processi di auto-organizzazione e partecipazione degli immigrati (Immigration, citizenship, participation: new demands for inclusion in public space. Processes of self-organization and participation of immigrants, ed)*, p. 25, Department of Cognitive, Psychological, Pedagogical Sciences and Cultural Studies (COSPECS), University of Messina, Quaderni di intercultura I/2009; Mantovan C., *Immigrazione e cittadinanza. Auto-organizzazione e partecipazione dei migranti in Italia (Immigration and Citizenship. Self-organization and participation of migrants in Italy, ed)*, p. 82, FrancoAngeli, Milan, 2007.

tica y social, actuar en un entorno competitivo, mantener una relación orientada al “usuario” en lugar de la participación directa en la vida del grupo/organización); y **obstáculos de origen institucional** (falta de reconocimiento de actores intermedios, preferencia por organizaciones más estructuradas, sistemas selectivos de acreditación y consulta, posicionamiento político que legitima las desigualdades).

Las formas y niveles de participación experimentadas son diversas y pueden referirse únicamente al origen del proceso de la conceptualización de acciones de incidencia política, estar presentes en la totalidad de la acción, o incluso, estar completamente ausentes. Las necesidades sociales o reivindicaciones de derechos expresadas directamente por las personas que acuden a los servicios inspiran muchas acciones de incidencia política, pero no necesariamente implican una participación directa en la planificación y el desarrollo de las iniciativas sociales y políticas que impulsan los sujetos a los que afectan.

Formas parciales de participación están representadas por el involucramiento de personas excluidas/discriminadas/racializadas en campañas de información en los medios de comunicación (por ejemplo, a través de la publicación de entrevistas o la práctica de la narración de historias), en eventos públicos y movilizaciones o en reuniones organizadas con instituciones.

La creación de grupos de discusión internos, la organización de seminarios, la apertura de espacios de socialización, la realización de encuestas sociales participativas útiles para analizar en profundidad el contexto social externo y las necesidades sociales emergentes, son algunas de las herramientas probadas para facilitar procesos participativos más inclusivos.

Como veremos más claramente en el próximo capítulo, existe una creciente presión y demanda que surge de las personas discriminadas y racializadas para reclamar espacios autónomos de expresión política, mayor visibilidad mediática y una relación directa con las instituciones.

Parte 2.

Incidencia política antirracista. Resultados de una encuesta cualitativa en cuatro países europeos

2.1. Movimientos antirracistas en Italia, España, Grecia y Malta. Similitudes y diferencias

Describir un panorama general de las realidades que operan en los distintos ámbitos de trabajo relacionados con la migración y la lucha contra el racismo en Italia, España, Grecia y Malta no es fácil, no solo debido a la diversidad de los distintos contextos nacionales, sino por otras razones varias. La naturaleza de los contextos difiere con referencia al estatus legal, la estructura organizacional, la composición de la base social, la misión social y la agenda política. A parte de las organizaciones estructuradas formalmente, existe una gran cantidad de subjetividad informal (comités espontáneos, campañas, espacios ocupados) cuya organización es muy “fluida” y difícil de precisar. La encuesta realizada en este universo fluido de la sociedad civil, cuyos resultados se presentan en este capítulo, nos obligó a tomar decisiones analíticas y a tomar conciencia de la parcialidad del panorama general que emerge.

Italia, más allá de los múltiples similitudes que comparte con la realidad española, presenta algunas peculiaridades que afectan, sobre todo, a las asociaciones de comunidades de inmigrantes,¹⁹ parte importante del mundo de las organizaciones de la sociedad civil (y que sin embargo, a menudo se encuentran excluidas de los procesos de toma de decisiones institucionales, y de circuitos que les conciernen), y las redes formadas por las nuevas generaciones de hijos de la inmigración (los llamados “G2” o “segunda generación”) o de “Italiani senza Cittadinanza” (“Italianos sin ciudadanía”).²⁰

A diferencia de Malta, que, en cambio, se queja de la ausencia de formas de organización autogestionadas por migrantes, incluso de primera generación, considerándose este factor un indicador muy importante de la falta de estabilidad y arraigo de las comunidades de migrantes.²¹

Sin embargo, entre los movimientos y organizaciones en España la coexistencia de un antirracismo de carácter más político, propio de los movimientos de base y otro tipo de antirracismo que caracteriza el *modus operandi* de las organizaciones de la sociedad civil, y que no considera la dimensión institucional y

19 Véase en: Lunaria, “Social priorities, participation, and advocacy practices. The experience of 20 Italian antiracist realities”, p. 10, available at: <http://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/BABI-SOCIAL-PRIORITIES-PARTICIPATION-ADVOCACY-PRACTICES-IN-ITALY.pdf>.

20 Italia no tiene muchas estadísticas nacionales sobre el fenómeno, pero Lunaria informa que las asociaciones de inmigrantes son una parte del mundo del tercer sector que está en gran fermento y evolución y que debe observarse con atención en sus diversas fases de crecimiento y cambio.

21 Según el informe maltés, la mayoría de los inmigrantes intentan abandonar Malta lo antes posible porque sienten que el país y la gente los considera indeseables.

estructural de la discriminación racista, es particularmente evidente. Por lo tanto, en España emerge una dimensión peculiar de cómo los movimientos de base antirracistas reconocen y utilizan el concepto de “incidencia política” para describir acciones políticas de reivindicación y denuncia.²²

Cabe señalar al respecto, que entre las diversas organizaciones antirracistas existe una amplia variedad de acciones consideradas “incisivas” a nivel de incidencia: desde manifestaciones y acciones de protesta en el espacio público, hasta los encuentros con políticos y/o actores institucionales para impulsar acciones legislativas, modificar protocolos de actuación o denunciar prácticas institucionales discriminatorias, así como la coordinación con otros movimientos antirracistas o sociales activos en áreas específicas, la organización de acciones de comunicación dirigidas a los medios o campañas denuncia y visibilización de prácticas racistas en las redes sociales.

Muchos de los actores entrevistados durante la investigación afirman haber llevado a cabo más de una de estas acciones a lo largo del tiempo: en algunos casos, de manera coherente y coordinada, aunque no siempre en el marco de una estrategia de incidencia política basada en una teoría precisa de cambio; en otros casos, de forma casi totalmente inconsciente y espontánea. Siendo esto un aspecto problemático y común en los cuatro países investigados.

En este sentido, Grecia tiene niveles de participación en la sociedad civil u organizaciones de base voluntaria “por debajo del promedio europeo”.²³ Sin embargo, al mismo tiempo, existen redes y organizaciones informales que juegan un papel similar al de la sociedad civil. Se tratan de organizaciones de distintos tamaños que trabajan en diferentes frentes, muchas veces cubriendo las necesidades básicas de personas migrantes y refugiadas que, en un principio, deberían estar cubiertas por las instituciones. Existen organizaciones con muchos años de experiencia, otras fundadas para responder a desafíos específicos surgidas recientemente y organizaciones extranjeras de toda Europa que han estado trabajando en Grecia durante los últimos años. Pero a pesar de esta presencia diversa, la participación “formal” de la sociedad civil sigue siendo baja en comparación con otros países de la UE.²⁴

22 Véase en: Sos Racisme, “Social priorities, participation, and advocacy practices. The experience of 20 Spanish antiracist realities”, p. 7, disponible en <http://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/BABI-SOCIAL-PRIORITIES-PARTICIPATION-ADVOCACY-PRACTICES-IN-SPAIN.pdf>.

23 Véase en: Antigone, “Social priorities, participation, and advocacy practices. The experience of 23 Greek antiracist realities”, p. 6, disponible en <http://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/BABI-SOCIAL-PRIORITIES-PARTICIPATION-ADVOCACY-PRACTICES-IN-GREECE.pdf>.

24 Antigone trató de obtener una muestra representativa de la imagen de esta OSC, y básicamente pudimos identificar seis tipos de OSC que trabajan con personas refugiadas y migrantes desde que comenzó la crisis migratoria. Esta categorización es permeable ya que existen redes como las Mesas de Trabajo de Incidencia en las que hacen parte entidades de diferentes categorías.

Malta parece encontrarse en una situación bastante singular en comparación con los otros tres países estudiados. Definida como “caótica”,²⁵ criticada por sus carencias y destacada por los esfuerzos que se realizan para apoyar acciones de incidencia política a pesar de las múltiples dificultades. Además de esto, y a diferencia de los otros 3 países, la característica principal del movimiento antirracista local es la grave falta de organizaciones de la sociedad civil y la falta de coordinación entre los grupos informales y las propias ONGs.²⁶

Más allá de las especificidades de cada país, el primer hecho que emerge con similitudes y diferencias, es la dificultad en “clasificación” debido a la complejidad inherente de los diferentes “espacios antirracistas” de los diferentes países, los distintos campos de intervención y los niveles y tipos de organización.

Desde el punto de vista organizativo del territorio, las grandes organizaciones nacionales, articuladas en oficinas locales, están rodeadas por asociaciones de carácter nacional, pero ausentes del territorio. España habla de la presencia de espacios de base autogestionados a nivel local, contruidos y articulados gracias al activismo.

De ahí que existan realidades híbridas que tienen una representación extendida sobre macro-áreas, que no siempre coinciden con los límites regionales y organizaciones a nivel local. Además de estas muchas realidades estructuradas, existen muchas otras en formas, estructuradas o no, como asociación o cooperativa que operan tanto a nivel nacional como local. Existen campañas de protesta y sensibilización y movimientos sociales que en varios casos brindan servicios tangibles a los migrantes que los necesitan como puede ser alojamiento en edificios ocupados (en Grecia, por ejemplo, existen iniciativas anarquistas que operan fuera de cualquier marco gubernamental dedicadas principalmente a proporcionar vivienda).²⁷ También hay movimientos que se forman, bajo un objetivo y operando de manera fluida en una comunidad que, sin embargo, no tiene una estructura de pertenencia territorial o que al menos no la manifiesta (como los movimientos Sin Fronteras, por ejemplo, presentes en los cuatro países, o las redes y platafor-

25 Aparte de esto, en Malta también hay un elemento de desorganización que se siente dentro del sector de la sociedad civil como un grado de superposición en las metas y objetivos de varios grupos. Parece provocar la duplicación del mismo trabajo que están haciendo, el desperdicio de recursos debido a la falta de coordinación y al pequeño tamaño de Malta.

26 Véase en: Sos Malta, “Social priorities, participation, and advocacy practices. The experience of 15 Maltese antiracist realities”, p. 8, available at: <http://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/BABI-SOCIAL-PRIORITIES-PARTICIPATION-ADVOCACY-PRACTICES-IN-MALTA.pdf>.

27 Iniciativas anarquistas que operan fuera de cualquier marco gubernamental dedicadas principalmente a la vivienda pero también al empoderamiento político en el centro de sus acciones. Las viviendas ocupadas para refugiados en Atenas y Tesalónica son ejemplos de estas iniciativas.

mas autogestionadas españolas³⁰ muy cercanas a los foros italianos). Muchos grupos se han formado espontáneamente a nivel local para brindar servicios a los solicitantes de asilo, recibidos temporalmente o en tránsito (Grecia menciona iniciativas más o menos informales que también involucran a trabajadores estatales que han trabajado en paralelo de manera voluntaria para cubrir las necesidades de refugiados y solicitantes de asilo).²⁸ Algunas de estas realidades también se interconectan más allá de las fronteras nacionales, reuniendo los intereses comunes de otros países europeos.

Otro dato interesante que nos ayuda a perfilar mejor este panorama es el relativo a los diversos frentes en los que se entrelazan estas realidades.

El primer frente, muy amplio y compartido, es el relacionado con el tema de la acogida, tanto en términos de gestión material y servicios relacionados con esta, como, desde una mirada más amplia, el de la lucha por los derechos de los solicitantes de asilo y por una reforma adecuada del propio derecho de asilo. Otro hilo de compromiso muy transversal es el de la protección de “fronteras”, ya sean terrestres o marítimas, con todas las violaciones de derechos que ello conlleva. Aquí tenemos iniciativas de rescate o las que se ocupan de los migrantes que transitan por la llamada “Ruta de los Balcanes” (fenómeno que, por ejemplo, define mucho a Grecia), o las que custodian las montañas de la frontera francesa, o que están presentes en los puertos.

A estas luchas colectivas se suman las que se manifiestan en contra los Centros de Detención para el Retorno (antiguos CIEs, ahora CPRs), lugares de cesación de la ley por excelencia, donde han ocurrido y ocurren muchas violaciones de derechos (este tema se aborda especialmente en Italia y España).

Luego, sin duda, está todo el compromiso que gira en torno a los derechos de ciudadanía. Este último es un concepto muy amplio, compartido por los cuatro países, que incluye todas las luchas por el pleno disfrute de los derechos fundamentales y las luchas contra la discriminación institucional.

Una pregunta central, que permanece abierta y se manifiesta de manera diferente en los cuatro países encuestados, es la relacionada con la participación de los migrantes, las minorías y la juventud descendiente de la inmigración en las campañas de incidencia que les conciernen: ¿en qué medida los migrantes y las personas afectadas por el racismo y la discriminación, incluida la discriminación institucional, son protagonistas efectivos y “constructores” autónomos de acciones de incidencia? ¿Y, por lo contrario, cuántas acciones de incidencia siguen siendo

28 Véase en: Antigone, “Social priorities, participation, and advocacy practices. The experience of 23 Greek antiracist realities”, p. 7, disponible en <http://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/BABI-SOCIAL-PRIORITIES-PARTICIPATION-ADVOCACY-PRACTICES-IN-GREECE.pdf>.

lideradas por nativos? Este es un tema abordado bajo diferentes perspectivas que reflexionan sobre su complejidad.

Las razones citadas como obstáculos a la participación (desde la emergencia inherente de los hechos, hasta las barreras idiomáticas, pasando por la precariedad sociolaboral) merecen ser analizadas a fondo, no sólo bajo la luz de las realidades individuales de cada país, sino también bajo una visión compartida a nivel europeo.

2.2. Metodología

En este capítulo presentamos los principales resultados de una investigación cualitativa, que involucró a 78 organizaciones/iniciativas/redes (asociaciones de inmigrantes, refugiados y ciudadanos de origen extranjero, asociaciones no gubernamentales, comités informales, campañas y grupos informales) activas en Italia, España, Grecia y Malta en la lucha contra la discriminación y en la promoción de los derechos de ciudadanía de los migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, ciudadanos de origen extranjero, romaníes.

La investigación tuvo como objetivo analizar la experiencia en incidencia política adquirida por las organizaciones entrevistadas, centrándose en tres aspectos principales:

- Las prioridades de la agenda política, los derechos que se reclaman y las necesidades sociales a las que pretenden dar respuesta las iniciativas de incidencia impulsadas;
- El nivel de participación y liderazgo de las personas migrantes y racializadas en la definición de la agenda política de las realidades entrevistadas, los sistemas de organización interna y los principales obstáculos que pueden limitar el protagonismo, liderazgo y participación de personas racializadas en la lucha antirracista;
- Algunas acciones ejemplares de incidencia política llevadas a cabo

Nos fijamos el objetivo de verificar si, y en qué medida, el concepto de incidencia (y en particular de incidencia política) es aplicable al mundo antirracista de los países involucrados en la encuesta y, de ser así, con qué estrategias y con qué prácticas se implementa.

La metodología de la encuesta constó de tres fases.

La revisión y análisis de la literatura internacional brindó un sustento teórico básico en cuanto a la definición de la incidencia política, los modelos de

incidencia política existentes, las etapas del ciclo de incidencia y los principales temas que abarcan los estudios que analizan las iniciativas de incidencia política realizadas por organizaciones sin ánimo de lucro. La revisión de la literatura nacional se centró en el tema de la participación de los ciudadanos extranjeros en la vida pública y asociativa y en las políticas públicas a nivel local para facilitar los procesos de ciudadanía social. La revisión se organizó en fichas de sumario de la encuesta.

En una segunda fase, se procedió a elaborar una matriz de entrevista (contenida en el Anexo) para realizar entrevistas cualitativas semiestructuradas con asociaciones/comités/movimientos informales comprometidos en el campo de la garantía de los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, y en la lucha contra la discriminación xenófoba y racista. A continuación, se procedió a identificar cinco áreas de intervención sobre las que centrar la atención: antidiscriminación, bienestar, trabajo, educación y formación, y salud.

Los criterios que guiaron la selección de las realidades sociales a entrevistar son los siguientes:

- Las actuaciones de incidencia política en alguna de sus formas;
- El compromiso hacia, al menos, una de las cinco áreas temáticas elegidas;
- La representación grupos/estructuras autoorganizadas por parte de migrantes, ciudadanos extranjeros o personas de origen extranjero, pero también de organizaciones antirracistas más formales;
- La necesidad de analizar las prácticas incidencia política realizadas tanto a nivel local como nacional;
- La necesidad de interactuar con espacios donde se practican diferentes estrategias de incidencia política (referente a los destinatarios, las prácticas, las herramientas de activación y comunicación utilizadas).

Las entrevistas se realizaron entre marzo y julio de 2021 utilizando, según el país, plataformas en línea, conversaciones telefónicas o entrevistas personales; estas entrevistas se grabaron y luego se resumieron en formularios de análisis estandarizados. Luego, el análisis se realizó considerando las tres dimensiones principales investigadas: la misión social y la agenda política; los procesos participativos; y las experiencias de incidencia política vividas por los agentes entrevistados.

La última fase se centró en la redacción de los informes nacionales.²⁹

29 Los informes están disponibles aquí: <http://www.cronachediordinariorazzismo.org/babi-better-advocacy-better-inclusion-eng/>

2.3. Actuando en un contexto de racismo institucional y estructural

La distinción entre ciudadanos y no ciudadanos, basada en un concepto de ciudadanía centrado en la nacionalidad y el lugar de nacimiento, atraviesa la historia de las democracias liberales. Gracias a esta distinción, los estados-nación liberal-democráticos han privado “legalmente” a grandes grupos sociales de derechos fundamentales dentro de un orden democrático aparentemente sólido.³⁰

La distinción entre ciudadanos y no ciudadanos, entre nacionales y no nacionales, puede ser considerada como la “madre de la discriminación” que impregna no sólo la legislación nacional sobre inmigración y asilo, sino también las normas que regulan la titularidad y el acceso a determinados derechos civiles, sociales y políticos fundamentales. La crisis económico-financiera mundial iniciada en 2008, junto con las posteriores políticas de austeridad, han contribuido a profundizar en Europa las distancias que separan a los ciudadanos de la UE de los extracomunitarios.

Las instituciones europeas y nacionales han tendido hasta ahora a eliminar la relación existente entre los modelos de gobernanza de las políticas de migración y asilo, y la propagación de formas de discriminación y racismo que afectan especialmente a las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, gitanas, afrodescendientes, y minorías religiosas. Sin embargo, esta relación se ha hecho cada vez más evidente en los últimos años, cuando ante lo que se ha definido repetidamente como “crisis” humanitarias de migrantes y refugiados, la adopción de decisiones políticas inspiradas únicamente en el concepto de “emergencia”, lejos de asegurar la buena “gobernanza” de la migración, ha contribuido a alimentar la proliferación de formas de discriminación, xenofobia y racismo a nivel social, político e institucional.

La crisis humanitaria de 2015, las numerosas violaciones de derechos humanos que afectaron a cientos de refugiados a lo largo de la Ruta de los Balcanes en 2019 y 2020, la actual crisis en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, la muerte de migrantes en el Canal de la Mancha, y las numerosas muertes que siguen teniendo el Mediterráneo, ponen de manifiesto el desfase entre la protección formal de los derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a solicitar asilo, previsto en el Derecho de la Unión, y la garantía efectiva de dichos derechos. Además, hacen cada vez más explícito el vínculo inextricable actual entre la migración, las políticas mi-

30 Arendt H., “The Decline of the Nation State and the End of Human Rights”, in *The Origins of Totalitarianism*, 1953.

gratorias de seguridad y la consolidación de formas estructurales e institucionales de xenofobia y racismo. Así que podríamos decir que las instituciones europeas de hoy no solo excluyen a “los inmigrantes de un conjunto particular de derechos sino del mismo derecho a tener derechos” (Urbán 2019, 116, ours italics).³¹

La propia Comisión Europea, en el **Plan de acción antirracista de la Unión Europea 2020-2025**, adopta el concepto de racismo estructural identificando la discriminación, las ideas y las conductas racistas no sólo con los actos atribuibles a los individuos, sino también a los actos y manifestaciones de un sistema público, institucional, social y cultural que contribuye de diversas formas a consolidar y reiterar prejuicios, estereotipos, desigualdades y La evaluación del marco jurídico comunitario en materia de discriminación y racismo es uno de los objetivos identificados en el Plan, que incluye varias medidas para controlar la aplicación, por parte de los Estados miembros de la Directiva 43/2000, del principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su “origen racial y étnico”, prohibiendo la discriminación en los ámbitos del empleo, las condiciones de trabajo, la educación y la protección social, y del ‘Marco de Decisión de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia’ del Consejo del 28 de noviembre de 2008, destinada a sancionar penalmente las manifestaciones de racismo y xenofobia.

El reconocimiento del carácter estructural y sistémico de la xenofobia y el racismo es un paso indispensable para intentar identificar las raíces profundas de la discriminación y las múltiples violaciones de derechos que afectan a las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, jóvenes descendientes de la inmigración”, minorías religiosas y personas de origen extranjero.

Aquí nos centraremos en primer lugar en las formas de **racismo institucional** definidas como el conjunto de actos, conductas, abusos, hostigamientos, discriminaciones y violencias realizadas por personas o entidades que cumplen una función institucional, a nivel político o administrativo, basado en su nacionalidad u origen nacional o étnico, creencias y prácticas religiosas, características somáticas, prácticas culturales y estatus legal.³² Incluimos en las manifestaciones de racismo institucional las normas que pueden estar contenidas en las leyes de inmigración, deportaciones, detenciones administrativas, etc. y las prácticas administrativas (por ejemplo, devoluciones ilícitas que impiden el ejercicio efectivo del derecho de asi-

31 Urbán, M. 2019. *La Emergencia de Vox. Apuntes para combatir la extrema derecha española*. Barcelona: Sylone/Viento Sur.

32 Véase en: A. Rivera, “Razzismo”, in: UTET, *Diritti umani. Cultura dei diritti e dignità della persona nell'epoca della globalizzazione*, 6 voll., 2007; Naletto G. (edited by), *Rapporto sul razzismo in Italia*, Manifestolibri, 2009.

lo o procedimientos que obstaculizan el acceso a los derechos sociales) que tengan por objeto o efecto destruir o menospreciar el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito político, económico, social y cultural y en cualquier otro ámbito de la vida pública y/o de vulnerar la dignidad de la persona, creando un clima intimidatorio, hostil, degradante, humillante y ofensivo. Estas normas, ideas y prácticas están hoy en el centro del discurso público sobre la migración, contribuyen a producir y reproducir el racismo y dificultando acciones de incidencia de los movimientos antirracistas. En las siguientes páginas intentaremos destacarlas a partir de los resultados de las entrevistas realizadas a 77 asociaciones y grupos sociales activos en iniciativas de incidencia antirracista en Italia, Grecia, España y Malta. creando un clima intimidatorio, hostil, degradante, humillante y ofensivo. Estas normas, ideas y prácticas están hoy en el centro del discurso público sobre la migración, contribuyen a producir y reproducir el racismo y dificultan la acción de incidencia de los movimientos antirracistas. En las siguientes páginas intentaremos destacarlas a partir de los resultados de las entrevistas realizadas a 77 asociaciones y grupos sociales activos en iniciativas de incidencia antirracista en Italia, Grecia, España y Malta.

En la segunda parte, nos centraremos en las formas de **racismo estructural** que afectan el mundo socioeconómico, el mundo de la información, la cultura y la sociedad.

2.3.1 Racismo institucional

Políticas de migración y asilo

La Unión Europea no ha adoptado una legislación común sobre la llamada migración económica.³³ Una propuesta de la Comisión hecha en 2001 nunca fue debatida y posteriormente fue retirada. Esta parece ser la principal carencia de las políticas adoptadas hasta ahora para contrarrestar la migración “ilegal”: la ausencia de vías legales de entrada para la migración económica, además de provocar graves violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, alimenta por un lado el tráfico ilegal de personas y por otro lado los casos de utilización instrumental de la solicitud de asilo; además, ejerce presión

33 Véase en: Favilli C., “Il diritto dell’Unione europea e il fenomeno migratorio”, in Zorzella N., Giovannetti M. (a cura di), *Ius Migrandi*, Franco Angeli, 2021.

sobre los sistemas nacionales de acogida e implica crecientes compromisos humanos y financieros en las políticas de “vigilancia, control, detención y repatriación”.

Las reformas de las legislaciones nacionales de los Estados miembros llevadas a cabo en los últimos años y las prácticas administrativas adoptadas en España, Grecia, Italia y Malta muestran un rasgo común: la elección de dar prioridad a la lucha contra la inmigración definida como “ilegal”, con la denegación de acceso a un puerto seguro a los barcos que proporcionar salvamento en el mar (en Italia, Grecia como en Malta) y con denegaciones realizadas en las fronteras terrestres (en España en Ceuta y Melilla, en Italia en la frontera con Eslovenia, en Grecia en las costas de Evros en la frontera con Turquía). Esto sucede incluso cuando significa poner en peligro la vida de cientos de inmigrantes y negar el derecho a solicitar asilo, un derecho reconocido formalmente a nivel europeo bajo el Reglamento de Dublín.

La ley Bossi-Fini³⁴ aprobada en Italia en 2002 puede considerarse desde este punto de vista un caso ejemplar porque ha allanado el camino para una política más restrictiva de entrada, estancia y expulsión de inmigrantes indocumentados, introduciendo sanciones penales contra la inmigración “ilegal”. La ley Bossi-Fini es un importante referente histórico porque representa un momento en el que no solo Italia, sino muchos países europeos comenzaron a promulgar leyes que transformaron la inmigración, de un fenómeno social y humanitario que debe ser gobernado garantizando derechos humanos fundamentales, a un *problema de orden público*.

Este enfoque también se refleja en el **Nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo**³⁵ propuesto por la Comisión Europea en septiembre de 2020, que tiene entre sus principales objetivos: la aceleración y “agilización” de los trámites para examinar las solicitudes de asilo; la introducción de un “sistema flexible” de solidaridad entre países miembros en situaciones de “crisis migratoria”; el desarrollo de políticas de cooperación con terceros países encaminada a combatir la migración y la colaboración en materia de readmisión; la creación de un sistema de gobernanza común de la migración y el retorno. Una vez más, la atención de la Comunidad parece estar desequilibrada del lado de las actividades destinadas a reforzar el control de las fronteras exteriores, bloqueando las operaciones de entrada y retorno.³⁶

34 La ley n. 189/2002, llamada Bossi-Finitoma su nombre de Umberto Bossi líder de la Liga Norte y Gianfranco Fini líder de la Alianza Nacional. Los dos partidos de derecha formaban parte de una coalición de gobierno encabezada por Silvio Berlusconi, líder de Forza Italia.

35 Ver: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions A New Pact on Migration and Asylum, disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:609:FIN>

36 Ver: Asgi, *Le criticità del patto europeo migrazione e asilo alla luce del contesto italiano*, January 2021,

Estas reformas han ido acompañadas de un debate público, y específicamente político, de carácter predominantemente securitario, que tiende a asociar en ocasiones las migraciones a los fenómenos de inseguridad/ilegalidad, riesgo de invasión, incompatibilidad cultural/religiosa, costes públicos económicos y sociales insostenibles, supuesta competencia entre nacionales y no nacionales/minorías en el bienestar y el mercado laboral o el peligro de propagación del terrorismo islámico, para justificar el cierre de la Fortaleza Europa.³⁷

Esta tendencia a la securitización ha caracterizado la gestión de los gobiernos italiano, griego y maltés de la llegada de migrantes y refugiados a sus costas, con continuas violaciones de los derechos fundamentales en puntos críticos y centros de detención. Este sigue siendo el caso hoy en el “punto caliente” de Lesbos, en los Centros de Internamiento de Extranjeros españoles, en los centros de detención malteses y en los Centri di Permanenza per il Rimpatrio italianos, donde tanto ciudadanos extranjeros indocumentados que han recibido una orden de deportación, como muchos solicitantes de asilo, son detenidos.

Finalmente, como denuncian numerosas acciones de incidencia en los cuatro países analizados, aunque los procedimientos de asilo son compartidos en toda la UE, cada Estado miembro los aplica de manera diferente, socavando a menudo la equidad de los procedimientos de recepción y revisión de las solicitudes de protección internacional y las normas de recepción de los solicitantes de asilo.³⁸

Cambiar las políticas relacionadas con la entrada, el tránsito y la recepción de migrantes es esencial para garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales y el derecho a la movilidad. La sociedad civil y las ONG están implicadas en la denuncia de la existencia de todos los espacios de vulneración de derechos, sacar a la luz las discriminaciones que generan e identificar las políticas que las provocan.

disponible en <https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/criticita-patto-europeo-migrazione-e-asilo-contesto-italiano/>). En Italia hay varias iniciativas de incidencia promovidas por la sociedad civil destinadas a reclamar una revisión profunda del Pacto Europeo. Entre estos, además del compromiso de Asgi, destacamos el del ex Canapificio di Caserta realizado en colaboración con el Forum Cambiare l'ordine delle cose y un manifiesto producido por la campaña nacional *Io accolgo* a la que también se sumó Lunaria.

37 Para un análisis del debate público europeo sobre la migración, véase: Análisis del discurso de odio público en seis países europeos, 2019, disponible aquí: www.cronachediordinariorazzismo.org; Lunaria, Adice, Antigone-Information and documentation center on racism, ecology, peace and non-violence, Grenzenlos, Kisa and SOS Racisme, (eds.), *Words are stones. Analysis of public hate speech in six European countries*, 2019, disponible en: <https://www.cronachediordinariorazzismo.org/international-report/?preview=true>

38 Particularmente comprometidos con el cierre de los centros de internamiento en España está Comunidad Negra Afrodescendiente y Africana - CNNAE y la campaña *Tanquem els CIEs/CIEs NO*; en Italy la campaña *LasCIEntrare* lucha con el mismo objetivo (ver información detallada en los informes nacionales).

Políticas de migración y asilo. La agenda social

- Lanzar misiones públicas europeas de búsqueda y salvamento de migrantes en el mar;
- Abandonar a nivel de la UE la prohibición de la llamada migración económica;
- Reformar el Reglamento de Dublín, con especial referencia a la obligación de solicitar asilo en el país de primera entrada;
- Abrir corredores humanitarios para los solicitantes de asilo;
- Introducir un principio de solidaridad obligatorio en las intervenciones de acogida a nivel europeo;
- Promover la cooperación internacional que excluya cualquier forma de apoyo económico a gobiernos de países que no garanticen los derechos humanos;
- Respetar las normas internacionales que prohíben la violación del principio de no devolución de los solicitantes de asilo y refugiados garantizando el derecho a solicitar asilo y aboliendo el uso de la definición de “tercer país seguro”;
- Adecuar las políticas nacionales a las normas que protegen el derecho de asilo contenidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención de Ginebra sobre Refugiados y las diversas directivas europeas en la materia;
- Abolir el sistema de “puntos calientes” y el régimen de detención administrativa;
- Promover iniciativas independientes de vigilancia de los derechos humanos a lo largo de las fronteras de la UE y dentro de los territorios de los estados miembros;
- Introducir mecanismos ordinarios de regularización que permitan a los extranjeros que residan permanentemente en Europa obtener un permiso de estancia.

Perfil étnico o racial

La gestión prohibicionista de la migración genera múltiples violaciones de derechos por parte de la policía que opera en las fronteras (como en Grecia), pero también dentro de los mismos países, donde los abusos a menudo se registran durante controles de documentación específicos que también involucran a inmigrantes con residencia permanente y ciudadanos de países extranjeros, lo que da lugar a los fenómenos de perfilado étnico/racial.

Esta definición se refiere a las operaciones de detención y registro, vigilancia e investigaciones llevadas a cabo por los organismos encargados de hacer cumplir la ley debido a prejuicios basados en características somáticas, etnia, idioma, religión, orígenes, nacionalidad. Estas intervenciones se encuentran entre las áreas con la tasa más altas de discriminación percibida, asociada con estereotipos de motivación racial.

Numerosos informes publicados por organizaciones de la sociedad civil indican que las personas racializadas y/o de nacionalidad extranjera son detenidas por la policía con más frecuencia que las personas “blancas” y/o con nacionalidad de los cuatro países participantes en el proyecto.³⁹ Además, la discriminación policial tiende a afectar con más frecuencia a las personas con menores ingresos.

Muchos casos de discriminación sufridos por grupos minoritarios o inmigrantes no se denuncian a la policía por temor a represalias o por falta de confianza en las autoridades y en la posibilidad de obtener justicia. La constante sensación de inseguridad y vulnerabilidad en la que viven desencadena un círculo vicioso que contribuye a perpetuar y reproducir el trato desigual y complica la inclusión social de los recién llegados a la sociedad europea y sus relaciones con las comunidades locales.

39 En España se han impulsado varias iniciativas para prevenir este fenómeno principalmente a través del seguimiento y denuncia de controles documentales arbitrarios y violaciones de derechos humanos. SOS Racisme, una de las organizaciones coautoras de este manual, tiene una larga experiencia en la documentación de este fenómeno. Véanse también las fichas dedicadas al Colectivo Jardins de Santa Pau, al Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, a la campaña Parado de Pararme, al Espacio Antirracista de Salt-Girona contenidas en el Informe Nacional de España. En Italia, en Ferrara, el colectivo Occhio ai Media ha promovido una iniciativa similar monitoreando y denunciando la recurrencia de operaciones policiales en determinadas zonas de la ciudad, en vísperas de las elecciones locales, a través de la producción de un video-documental. El colectivo ha destacado cómo estas operaciones, con la complicidad de la prensa local, han contribuido a alimentar y difundir en la opinión pública la asociación de la presencia extranjera con el aumento de la inseguridad. Véase la ficha técnica contenida en el informe nacional italiano.

Perfil étnico/racial. La agenda social

- Reconocer la dimensión real de la elaboración de perfiles étnicos/raciales y condenarla públicamente.
- Tomar medidas para prevenir y prohibir la identificación basada en el color de la piel o las características físicas, culturales y religiosas.
- Recopilar datos sobre cada operación de identificación realizada y publicar periódicamente estadísticas sobre el tema.
- Introducir medidas para supervisar el trabajo de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y sancionar a los agentes que realicen controles policiales de forma discriminatoria e injustificada.
- Facilitar mecanismos de denuncia y protesta para poblaciones sujetas a identificaciones y registros arbitrarios.
- Difundir información sobre los derechos y garantías de las personas y dar respuesta a sus denuncias y protestas acerca de conductas ilícitas.
- Capacitar a los profesionales encargados de hacer cumplir la ley para prevenir la elaboración de perfiles étnicos/raciales.
- Cesar la concentración selectiva de la presencia policial en áreas con la mayor densidad de población extranjera.

De la norma a la práctica administrativa: la recepción que excluye

La discriminación, la vulneración de derechos y las formas de racismo institucional se generan no sólo por leyes injustas, sino también por modalidades y procedimientos administrativos por las cuales estas se aplican (o no), y por modelos de gestión adoptados en los distintos estados miembros, tanto en el ámbito de la acogida de solicitantes de asilo y refugiados, como en el de las políticas de ciudadanía e inclusión social de los inmigrantes y las minorías.

En el ámbito de la acogida surgen cuatro cuestiones críticas de carácter estructural relacionadas con: 1. El modelo de acogida elegido; 2. La falta de coordinación entre las distintas autoridades competentes; 3. La insuficiencia o mal uso de los recursos públicos disponibles; 4. La falta de transparencia en el trabajo de las instituciones.

La necesidad de estructurar un modelo público, coordinado y eficiente de acogida de solicitantes de asilo y refugiados en los distintos países miembros a lo largo del territorio, es una de las prioridades identificadas. Si bien España, Malta, Grecia e Italia cuentan con diferentes sistemas de acogida, lo que todos ellos tienen en común es la sustancial insuficiencia de las intervenciones adoptadas hasta el momento frente a la “demanda de acogida” existente, y la tendencia persistente a concentrar solicitantes de asilo en grandes estructuras, a menudo aisladas.

De entrada, es importante la necesidad de distinguir claramente entre los programas, proyectos y centros públicos de acogida de solicitantes de asilo y refugiados, y los sistemas de detención administrativa que tienen una función completamente distinta, encaminados a la repatriación de migrantes sujetos a una orden de expulsión. De hecho, estos últimos son estructuras cerradas que intervienen para limitar la libertad de circulación de las personas, aunque a menudo y de forma inadecuada se integran al sistema de acogida.

En segundo lugar, diversas experiencias de la sociedad civil ponen de manifiesto la necesidad de abandonar concepciones puramente caritativas sobre la acogida y la solidaridad, y de repensar en profundidad los sistemas gubernamentales de acogida que tienden a deshumanizar a los solicitantes de asilo y refugiados y a mantenerlos en una condición pasiva de dependencia de los servicios públicos. Por ejemplo, algunas experiencias de acogida autogestionada en Grecia han intentado dignificar a los solicitantes de asilo y refugiados, y promover su autonomía a través de formas horizontales de autoorganización y autogestión, con el objetivo de responsabilizar directamente a las personas involucradas. Desde este punto de vista, son ejemplares las experiencias (lamentablemente desmanteladas por la policía) llevadas a cabo en

el City Plaza de Atenas y en el Orfanato de Tesalónica. Experiencias similares se presentan en sitios ocupados de grandes ciudades italianas, y en Catalunya.

La situación italiana es aún más compleja debido a la existencia de un sistema binario de acogida institucional, estructurado en los denominados Centros Extraordinarios de Recepción (CAS) gestionados por las Prefecturas (oficinas territoriales dependientes del Ministerio del Interior), y en el SAI (Sistema de Acogida e Integración), que contempla la colaboración de municipios y organizaciones del tercer sector en pequeños y medianos proyectos de acogida, repartidos por todo el país. Mientras que los CAS se limitan a ofrecer una recepción material y en su mayoría son grandes y estructuralmente inadecuados para asegurar una atención personalizada y adecuada para las personas acogidas, los proyectos SAI, aunque con algunas limitaciones en su implementación concreta, son considerados el modelo institucional más adecuado por parte de la sociedad civil, porque están diseñados para promover la autonomía y la inclusión progresiva de las personas acogidas en las comunidades locales. Por lo tanto, en Italia, una cuestión planteada por muchas de las organizaciones sociales entrevistadas es la desarticulación progresiva del sistema de acogida gubernamental de “emergencia” y la ampliación del número de proyectos de acogida gestionados a nivel municipal. En el sistema español existen características y problemas similares, donde parece especialmente difícil coordinar intervenciones garantizadas en la primera fase de acogida con aquellas referentes a la segunda fase de acogida, que deberían promover la inclusión laboral y social de las personas refugiadas.⁴⁰

La **fragmentación de las competencias institucionales** en el ámbito de la acogida e inclusión social de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas es, de hecho, otra cuestión significativa, tanto a nivel central (debido a la distribución de competencias entre los distintos Ministerios), como en la articulación entre los diferentes niveles de gobierno (nacional, regional y municipal). Esto parece derivar de una distribución desequilibrada de competencias entre las diversas autoridades (lo que, por ejemplo, en Grecia limita severamente el alcance y la autonomía de la intervención de las autoridades locales), debido a una planificación nacional poco adecuada, y también a la competencia política que puede enfrentar instituciones entre sí lideradas por fuerzas políticas con diferentes tendencias.⁴¹

40 Véase: Ribera Almandoz, O. Delclós, C. Garcés Mascareñas. B. 2020. *Casa nostra, casa vostra?*

Condicions i trajectòries d'accés a l'habitatge de sol·licitants d'asil i refugiats a Catalunya. Barcelona: CIDOB.

41 Este es el caso del alcalde de Chalkida (Greece) que se negó a facilitar autobuses escolares a los niños de un campamento para acceder a la escuela, incumpliendo los derechos fundamentales de los niños protegidos por la legislación griega. Solo después de que la maestra a cargo del campamento educativo hiciera público el caso con un artículo en la prensa, llevando el caso a la Defensoría del

Esto dificulta significativamente la coordinación eficiente de las intervenciones. En cambio, una racionalización del sistema de gestión debería atribuir a los municipios un papel central en la planificación y gestión de las intervenciones de acogida e inclusión social, ya que son los órganos más cercanos al territorio y, por tanto, potencialmente más capaces de identificar y abordar las necesidades diarias de los solicitantes de asilo y refugiados.⁴²

La escasez y/o mal uso de los recursos públicos destinados a las políticas de acogida (e inclusión social), por un lado, desemboca en una gestión de emergencia en las intervenciones, por otro lado, determina en muchos casos una calidad de los servicios que no se ajusta a los estándares mínimos de acogida definidos a nivel europeo. La decisión de priorizar la concentración de muchos solicitantes de asilo en grandes centros gubernamentales responde también a la voluntad de aplicar “economías de escala” en la gestión de los servicios, y se han documentado numerosas violaciones de derechos humanos precisamente en los grandes centros gubernamentales para solicitantes de asilo en Italia y en Grecia, según numerosas investigaciones realizadas por la sociedad civil y los medios de comunicación.⁴³

En algunos casos, los recortes en los fondos públicos disponibles han llevado a la interrupción repentina de programas de acogida y vivienda que se consideraban efectivos. Este es el caso de ESTIA, un programa de vivienda que, a pesar de no contar con fondos suficientes y no representar un plan integral de vivienda, logró albergar a una parte importante de los solicitantes de asilo en Grecia. El programa se suspendió a principios del verano de 2020, cuando se anunció que se lanzaría un programa de política de vivienda más integral. Aun así, a otoño de 2021, no se ha presentado aún ningún plan nacional.⁴⁴

El problema de la falta de recursos parece ser lo que aluden las instituciones para justificar políticas más restrictivas que afectan a los derechos de las personas migrantes y refugiadas y su inclusión en los mercados laborales locales. Atrapados en

Pueblo y luego de que se diera a conocer a nivel nacional, las autoridades judiciales presionaron al alcalde quien finalmente cedió a las demandas.

42 Esta solicitud fue destacada por muchas de las organizaciones entrevistadas en Grecia (Arsis, Lesvos Solidarity, Foro Griego para los Refugiados) y en Italia (Arci, Ex Canapificio di Caserta, No cap, Naga, Refugees welcome, Tempi moderni). Para obtener más información, consulte los informes nacionales pertinentes.

43 Véase por ejemplo: Refugees Support Aegean, *The “hotspot” experiment: removing human rights from the equation*, 2018, disponible en: <https://rsaegreek.org/en/the-hotspots-experiment/>; Asgi, *Moria: EU policy is to blame, not refugees*, 2020, here: <https://www.asgi.it/notizie/moria-colpa-della-politica-ue-non-dei-rifugiati/>; informes periódicos publicados por la campaña LasciateCIEntrare, aquí: <https://www.lasciatecientrare.it/viaggio-nellitalia-della-mala-accoglienza/>.

44 Consultar el informe nacional griego.

laberintos burocráticos y períodos de espera que dificultan su acceso a los sistemas tributarios, los migrantes quedan en una posición vulnerable, y a menudo terminan trabajando ilegalmente, en condiciones muy precarias. La falta de una planificación coherente de las políticas de acogida, inserción social y laboral, coordinadas entre los diferentes niveles de gobierno, genera situaciones kafkianas que socavan cualquier proceso real de construcción de la autonomía de las personas.

La falta de transparencia de las políticas públicas adoptadas y de los recursos asignados a las mismas abre ciertamente un amplio espacio para estas graves violaciones de derechos. Precisamente referente al tema de la transparencia en Italia, varias iniciativas de monitoreo cívico han sido desarrolladas para solicitar a las distintas instituciones competentes la publicación sistemática de datos sobre solicitantes de asilo y refugiados alojados en centros gubernamentales, el mapeo de proyectos y centros de acogida existentes, licitaciones públicas para la asignación de servicios, convenios estipulados para su gestión, y también obtener acceso a los distintos centros por parte de la sociedad civil y los medios de comunicación.⁴⁵ El problema de la transparencia es particularmente relevante en todos los países examinados con referencia al sistema de “puntos calientes” y centros de detención. Una vez más, el caso de los “puntos calientes” en las islas griegas, representado por el infame campamento de Moria en la isla de Lesbos, donde se han encontrado numerosas violaciones de la legislación griega y de las directivas de la UE, es representativo en un sentido negativo. Las organizaciones no gubernamentales presentes en el campo, como Lesbos Solidarity, han tratado de suplir la ausencia del Estado para cubrir las necesidades más básicas de las personas acogidas (como vivienda, escuelas, apoyo psicológico, etc.).

45 Véanse a este respecto las fichas técnicas dedicadas a ActionAid Italia, que viene realizando un seguimiento sistemático del CAS, y la dedicada a LasciateCIEntrare, campaña activa tanto en el CPR como en el CAS, presentada en el informe nacional italiano.

Recepción. La agenda social

- Atribuir competencias nacionales para la acogida e inclusión social de solicitantes de asilo y refugiados a los Ministerios de Política Social y/o Trabajo, suprimiendo cualquier competencia en esta materia por parte de los Ministerios del Interior.
- Fortalecer la capacidad de planificación mediante la contratación por parte de las administraciones públicas de personal cualificado adecuado (incluidas personas con antecedentes migratorios) y con la implicación activa de asociaciones de inmigrantes, refugiados y antirracistas en todo el ciclo de concepción, seguimiento y evaluación de las intervenciones.
- Preparar, dentro de un plazo determinado y adecuado, planes nacionales plurianuales de acogida que involucren la participación de los diferentes niveles de gobierno involucrados (ministerios, representantes de las autoridades locales, especialmente municipios).
- Aumentar los recursos nacionales y de la UE asignados a las políticas de acogida, inclusión social y ciudadanía de migrantes y refugiados.
- Modificar los modelos de gestión de servicios. Los concursos no deben recompensar el bajo coste de los servicios, sino la calidad del personal empleado y de los servicios prestados, los proyectos de pequeña escala, la acogida generalizada y familiar, el trabajo en red en el territorio y la capacidad de construir vías para que los solicitantes de asilo y los refugiados abandonen el sistema de acogida.
- Desinstitucionalizar la recepción de solicitantes de asilo y refugiados en todas las formas posibles, incluido el reconocimiento del valor social de las iniciativas autoorganizadas. Cesar los desalojos forzados llevados a cabo mediante operaciones de orden público, con una finalidad puramente de securitización.
- Situar en el centro de la gestión del sistema de acogida el papel de los municipios, otorgándoles autonomía en la planificación y el gasto público.
- Aumentar la transparencia de las políticas públicas adoptadas y prever la publicación sistemática de datos oficiales sobre el sistema de acogida (centros existentes, órganos gestores, importe de los convenios, información sobre las personas acogidas, resultados de las actividades de seguimiento y evaluación).
- Reforzar los servicios para los menores extranjeros no acompañados y las categorías más vulnerables de solicitantes de asilo y refugiados, evitando en todo caso su internación en centros de internamiento.

Ciudadanía que perpetúa la exclusión

La dificultad de acceso a la ciudadanía es otro problema compartido.

La definición de ciudadanía europea, prevista en el Tratado de Lisboa, no identifica un estatus de ciudadano europeo distinto del de ciudadano de un país estado miembro: en efecto, cualquier persona que ostente la ciudadanía de un estado miembro es ciudadano de la Unión: “La ciudadanía de la Unión se agrega a la ciudadanía nacional y no la reemplaza”. La ciudadanía europea, así como la ciudadanía definida en los estados miembros individuales, permanece ligada a la nacionalidad, y basada en el derecho de sangre (*ius sanguinis*) e implica a priori la distinción y la oposición entre los derechos de los ciudadanos “nacionales” y los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Desde hace un tiempo, se desarrolla en el entorno de los movimientos europeos una reflexión que tiende a proponer una idea de ciudadanía basada en la universalidad de los derechos de la persona y en su residencia en el territorio, más que en el principio de exclusión por nacionalidad. En este sentido, la ciudadanía es identificable en el conjunto de relaciones humanas, sociales e institucionales que constituyen la experiencia de las personas que viven en un determinado territorio. En un mundo cada vez más interconectado, en el que bienes, capitales y consumidores circulan libremente, es imposible negar a quienes se han visto obligados a abandonar su propio país, ya sea por un sistema económico y social mundial altamente desigual o por conflictos o persecuciones personales, el derecho a moverse y construir un proyecto de vida en otro lugar.

Aquellos que logran establecerse permanentemente en los países europeos se convierten, a todos los efectos, en una parte integral de la sociedad europea. Esto es aún más cierto para los hijos e hijas de la inmigración que nacen o crecen en Europa: excluirllos o mantenerlos lo más alejados posible de la ciudadanía y de la comunidad política significa desgarrar una sociedad ya profundamente marcada por graves formas de desigualdad y discriminación, debilitando su cohesión.

Obstruir la adquisición de la ciudadanía significa concretamente negar el ejercicio de los derechos políticos, ante todo el derecho al voto. En segundo lugar, una regulación restrictiva de la ciudadanía tiene como consecuencia prolongar injustamente la exposición de los ciudadanos extranjeros, migrantes y refugiados al riesgo de trato diferencial en el ámbito social, sanitario, laboral, incluso civil y recreativo.

Por estas razones, muchas campañas, asociaciones y grupos informales se involucran en acciones de incidencia que tienen como objetivo, por un lado, reformar

las leyes nacionales sobre ciudadanía y, por otro, apoyar a los ciudadanos extranjeros durante los complejos procedimientos legales requeridos actualmente para solicitarla. En el caso de Grecia o Italia, muchas asociaciones y movimientos se dedican exclusivamente a estos temas desde hace muchos años, ya que el acceso a la ciudadanía griega o italiana, tanto de menores como adultos nacidos o criados en estos países, no es tarea fácil.⁴⁶ La autoorganización, la movilización pública y el uso creativo de nuevos canales de comunicación son algunas de las herramientas más utilizadas en estas campañas de promoción de políticas que consideran el liderazgo de los llamados “migrantes de segunda generación”⁴⁷ en la promoción de acciones dirigidas tanto a los responsables de políticas como a la opinión pública.

Ciudadanía. La agenda social

- Desvincular la adquisición de la ciudadanía de la nacionalidad.
- Reformar la legislación nacional sobre ciudadanía mediante la modificación del período mínimo de presencia en el territorio exigido y la adopción del *ius soli* (derecho de residencia) como principio de referencia para los menores nacidos o criados en el país.
- Garantizar la correcta aplicación de la legislación, simplificando los procedimientos de presentación de la solicitud y respetando el plazo para su resolución.
- Reconocer el derecho al sufragio, al menos a nivel local, a los ciudadanos extranjeros de terceros países que residan permanentemente en el territorio.

46 La Generación 2.0 en Grecia y ASGI - Asociación de Estudios Jurídicos sobre Inmigración (Grupo Anti-Discriminación), Italianos sin Ciudadanía en Italia (ver informes nacionales) han estado luchando durante muchos años a diferentes niveles para facilitar los procedimientos para adquirir la ciudadanía con y acciones de incidencia jurídica encaminadas a reformar la legislación, pero también con actividades de seguimiento en terreno para conocer de cerca dónde residen los problemas burocráticos derivados de estas leyes restrictivas. A pesar de la concentración en diferentes temas, la reforma de la ley de ciudadanía es un objetivo compartido en muchas de las iniciativas y organizaciones entrevistadas, pues emerge como un obstáculo insalvable para cualquier iniciativa (desde la protección de los derechos al trabajo). En Italia, 8 de las 20 organizaciones e iniciativas entrevistadas tienen entre sus objetivos la reforma de la ley de ciudadanía.

47 Este es el caso de Generation 2.0 RED en Grecia (ver más abajo en iniciativas seleccionadas). Una de las organizaciones entrevistadas, liderada por inmigrantes de segunda generación, quienes tienen años de experiencia yendo mucho antes de la actual crisis humanitaria, en cabildeo legal. Su conocimiento y experiencia adquiridos están resultando muy útiles para defender los derechos de los inmigrantes y refugiados que ahora llegan a Grecia.

2.3.2. Racismo estructural

El principio de igualdad es uno de los pilares de la Carta de los Derechos Humanos Fundamentales de la Unión Europea, que prohíbe “toda forma de discriminación basada, en particular, en el sexo, la “raza”, el color o el origen étnico o social, características genéticas, idioma, religión o creencia, opinión política o de cualquier otra índole, pertenencia a una minoría nacional, propiedad, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual” (Artículo 21). Las Directivas 43 y 78 de 2000 también proporcionaron un marco legal de referencia para la garantía efectiva de la igualdad de trato en los países miembros en las diversas esferas de la vida económica y social: en la esfera de la formación profesional y el mundo laboral, en el ámbito de la protección social, la salud, la educación, la vivienda y el acceso a los servicios públicos y privados. Estas directivas han sido transpuestas a los ordenamientos jurídicos de los estados miembros de la UE, pero la garantía efectiva de igualdad de trato en estos ámbitos está lejos de alcanzarse. La propia Comisión Europea parece ser consciente de ello cuando identifica la educación, el trabajo, la sanidad y la vivienda como áreas prioritarias de intervención en el nuevo “**Plan de Acción para la Integración y la Inclusión 2021-2027**”.⁴⁸

Precisamente en estas áreas, inmigrantes, asociaciones y algunas iniciativas autoorganizadas en Grecia, Italia, España y Malta han detallado la existencia de hechos críticos que suceden de forma persistente y que provocan graves violaciones de derechos y discriminación. De hecho, el racismo sistémico no solo tiene un origen institucional; se arraiga estructuralmente en el sistema económico y social, gracias al mantenimiento de aquellas relaciones de desigualdad sobre las que se asienta el modelo de desarrollo capitalista neoliberal. El racismo institucional y el racismo estructural se superponen, entrelazan y retroalimentan y no siempre es posible establecer con certeza un orden de jerarquía entre el papel que juegan las instituciones, los poderes económicos, los medios y el comportamiento social en la producción y reproducción de diferentes formas de discriminación y racismo.

El mercado Laboral

Uno de los ejemplos paradigmáticos de este entrelazamiento lo representa la inserción de los migrantes en el mercado laboral. La historia de la migración, desde

⁴⁸ El plan está disponible aquí: https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=202011/action_plan_on_integration_and_inclusion_2021-2027.pdf

las grandes migraciones transoceánicas del siglo XIX, nos dice en efecto cómo los trabajadores extranjeros tienden a ser relegados a los segmentos menos protegidos, menos calificados y más ‘duros’ del mercado laboral, caracterizado por un alto nivel de precariedad, explotación y trabajo informal. Aún hoy, en los cuatro países examinados, los sectores de la agricultura, el trabajo doméstico y de cuidados, la logística, la construcción y la restauración son los ámbitos que expresan una acentuada “etnización” del trabajo.⁴⁹

Los elementos estructurales dentro del actual sistema económico están en el origen de este fenómeno: de hecho, es el mercado, interesado en mantener bajos los costes laborales, el que regula la demanda y la oferta de empleo. Sin embargo, las políticas institucionales también juegan un papel importante cuando, por ejemplo, dificultan la migración por motivos de trabajo; no combaten eficazmente las formas de explotación y el trabajo informal; establecen procedimientos complejos para el reconocimiento de cualificaciones; o estructuran programas de formación profesional para ciudadanos extranjeros de forma que reproduzcan el modelo de segregación laboral modelado por el mercado. Actuar para corregir este modelo no es fácil, pero algunas de las experiencias de incidencia política analizadas ofrecen elementos útiles para su reflexión.

En España e Italia se han impulsado numerosas campañas e iniciativas para solicitar la regularización de los ciudadanos extranjeros en situación irregular.⁵⁰ La regularización de las relaciones de residencia y trabajo debe priorizar la protección de los derechos de los trabajadores por encima de las necesidades del mercado y sancionar la explotación laboral, que en algunas áreas roza la semi-esclavitud. La introducción en la legislación de los países miembros de normas que favorezcan la aparición del trabajo informal (nacional y extranjero) y la negociación colectiva es un camino a seguir.⁵¹

La afiliación de trabajadores migrantes o refugiados a sindicatos locales puede

49 Ver: Pugliese E., “Gli immigrati nel mercato del lavoro e i modelli regionali di inserimento”, in Carchedi F. (edited by), *La risorsa inaspettata*, Ediesse, 1999 and Pugliese E., (edited by), *Rapporto immigrazione*, Rome, Ires - Ediesse, 2000.

50 Asgi, ActionAid, el ex-Canapificio of Caserta, Naga, el Coordinamento immigrati de Boloña y el Ero straniero la campaña italiana están muy cometidos en este frente. En España, la campaña #RegularizaciónYa, la Comunidad Negra Afrodescendiente y Africana y el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes luchan para la introducción de mecanismos de regularización incondicionales y permanentes para todos los migrantes indocumentados.

51 En Italia, la experiencia de NoCap es ejemplar desde este punto de vista. Esta asociación fue creada a raíz de una huelga de trabajadores agrícolas en Nardò y ha luchado por la aprobación de una nueva ley contra el “caporalato” (trabajo forzoso) y continúa trabajando para facilitar la salida de los “guetos” de muchos inmigrantes y su trabajo e inclusión social en las comunidades donde viven.

fortalecer la lucha de los migrantes por los derechos laborales, brindar oportunidades de crecimiento político y competir en igualdad de condiciones con los trabajadores locales.⁵²

Unas condiciones de vivienda insostenibles acompañan la explotación laboral de los trabajadores de temporada en las áreas agrícolas. La activación de los gobiernos locales puede ser decisiva para garantizar soluciones habitacionales adecuadas, como demuestra la campaña *Fruita amb Justícia Social* impulsada por temporeros en Cataluña durante la recolección de la fruta.⁵³

Trabajo. La agenda social

- Fortalecer la legislación nacional contra el trabajo/empleo ilegal.
- Favorecer la aparición del trabajo informal mediante la aplicación de mecanismos permanentes y estructurales de regularización de los trabajadores en situación irregular.
- Facilitar la adquisición de un permiso de residencia por motivos de trabajo por cuenta propia a los vendedores ambulantes.
- Simplificar los trámites necesarios para el reconocimiento de títulos.
- Incentivar programas de formación profesional dirigidos a migrantes, solicitantes de asilo y refugiados que abran vías calificadas para integrarse al mercado laboral.

52 Por ejemplo, en Malta, el Sindicato General de Trabajadores ha liderado una iniciativa interesante para pedir a las empresas que adapten los servicios de salud para tener en cuenta la cultura de los trabajadores inmigrantes. Otra experiencia significativa es la del ya mencionado Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes que, de forma autoorganizada, ha impulsado iniciativas públicas y encuentros con instituciones para frenar el abuso policial de los vendedores ambulantes indocumentados y también ha generado experiencias de ayuda mutua.

53 *Fruita amb Justícia Social* (Fruta con Justicia Social, ver sección Iniciativas Seleccionadas) abordó un problema recurrente experimentado por los trabajadores agrícolas, el de las condiciones de vivienda y contrato de los recolectores de fruta de temporada que se trasladan de una región a otra. Esta fuerza laboral migrante a menudo vive en las calles y los contratistas se aprovechan de su situación irregular. La campaña ha logrado involucrar a los municipios para abordar este problema.

Alojamiento

El derecho a una vivienda digna es un pilar en proceso de inclusión social. Sin embargo, este derecho es negado a muchos migrantes en todas las etapas de su proyecto migratorio. Las condiciones precarias de vivienda y la discriminación afectan a las personas solicitantes de asilo y refugiadas tanto dentro como fuera de los programas institucionales de acogida y contribuyen a agudizar su condición de vulnerabilidad.

En todos estos casos, la acogida debe garantizarse mediante la provisión de instalaciones dedicadas, sin obligar a las personas a someterse a largos procesos de evaluación solo para reconocer su derecho a la vivienda. La temporalidad que caracteriza la acogida institucional dificulta la construcción de caminos alternativos a la integración habitacional y muchas veces provoca el retorno al sinhogarismo.

Los cuatro países considerados tienen en común también la dificultad de los migrantes en la obtención del registro al padrón en el municipio de residencia.

Los casos de discriminación en el acceso al mercado de alquiler privado por parte de ciudadanos extranjeros o ciudadanos de origen extranjero por motivos nacionales, “étnicos” o “raciales” siguen siendo recurrentes en todos los países examinados. Esto ocurre en un contexto en el que, en parte debido a los recorres progresivos del gasto público y social de los últimos años, segmentos cada vez más importantes de la población “nacional” se encuentran en condiciones de precariedad o pobreza habitacional: en todos los países examinados, las políticas de vivienda son insuficientes para satisfacer la demanda existente. Esta situación contribuye a fomentar los fenómenos de guetización y segregación habitacional que afecta especialmente a las grandes periferias urbanas.

En ausencia de la intervención del gobierno, las ONG y otros grupos informales buscan promover iniciativas autogestionarias. En Grecia, por ejemplo, durante la llamada “crisis de los refugiados” debido a la falta de viviendas, muchos grupos del espacio antiautoritario, de izquierda y anarquista apoyaron la ocupación de viviendas donde se alojó y ayudó a los refugiados.⁵⁴ En cambio, en España, en la comarca catalana de la Garrotxa, se ha activado la plataforma Stop Racisme Lloguers para denunciar públicamente la discriminación racista en el acceso a la vivienda, apoyar a los afectados con acciones administrativas y judiciales y reclamar al gobierno la introducción de mecanismos simples y efectivos de reporte y denuncia. En Italia, Refugees Welcome ha estado experimentando durante algún

54 Ejemplos de estas iniciativas anarquistas en Grecia incluyen el apoyo a viviendas para refugiados en Tesalónica (Orfanato) o Atenas (City Plaza).

tiempo el alojamiento en familias como una forma alternativa de inclusión de vivienda a la vivienda institucional.⁵⁵

Alojamiento. La agenda social

- Lanzar nuevos planes de vivienda pública, asignando los recursos necesarios para hacer frente al creciente malestar habitacional que involucra a amplios segmentos de la población “nacional”, junto a muchos refugiados, migrantes y ciudadanos de origen extranjero.
- Diferenciar los programas de vivienda para solicitantes de asilo y refugiados, considerando las necesidades y requerimientos de los diferentes tipos de usuarios.
- Evitar políticas de vivienda pública que conduzcan a la guetización y la segregación de viviendas sobre una base nacional, étnica y social.
- Facilitar el registro/padrón de ciudadanos extranjeros en el municipio de residencia

Educación

La educación es un derecho humano fundamental y uno de los principales pilares para la inclusión de las personas refugiadas y migrantes en la sociedad de acogida; su falta de garantía constituye discriminación y aumenta el riesgo de exclusión social. Aunque el derecho fundamental de todos los niños/as a la educación básica está reconocido en el derecho internacional y europeo de derechos humanos, la calidad y la duración de la educación que se ofrece a los niños/as solicitantes de asilo, refugiados y migrantes depende del país de migración/asilo y no de sus necesidades educativas.

Nuevamente, en todos los países considerados, existe una brecha persistente entre la garantía formal del derecho a la educación y la garantía sustantiva.

En primer lugar, la fase de inserción escolar de los niños/as y estudiantes inmigrantes y solicitantes de asilo recién llegados todavía presenta muchas situaciones críticas: la inserción se produce muchas veces después de haber iniciado el curso escolar y esto lleva a la acumulación de un retraso no siempre recuperable, ni

⁵⁵ Consulte los informes nacionales para obtener más detalles.

con intervenciones adecuadas. Esta integración es particularmente difícil para los niños/as alojados en grandes campamentos o centros de recepción y para los niños/as romaníes que viven en asentamientos informales, en su mayoría ubicados en áreas periféricas de las ciudades.

En segundo lugar, los sistemas escolares siguen siendo muy eurocéntricos y poco inclusivos. Todavía hay un número muy limitado de escuelas que buscan promover políticas de educación intercultural e incluir en el currículo escolar elementos de conocimiento sobre la historia y la cultura de los países de origen de los niños/as y estudiantes extranjeros. Este enfoque eurocéntrico se ve, además, acentuado por la ausencia sustancial de docentes y profesores de origen extranjero en las escuelas y universidades.⁵⁶

Entre las prioridades que requieren especial atención se encuentran: la enseñanza de la lengua del país de residencia y del país de origen; procedimientos para el reconocimiento de la educación, la formación y las cualificaciones adquiridas en el país de origen; la mayor tasa de retraso y abandono escolar de los alumnos y alumnas extranjeros en comparación con sus pares nacionales; fenómenos de segregación escolar y formativa o de concentración de alumnos y alumnas extranjeras en determinadas escuelas e institutos técnicos y profesionales.

Diversas iniciativas de organizaciones de la sociedad civil⁵⁷ operan específicamente en el campo de la educación para garantizar la educación de los niños/as extranjeros, combatir el fenómeno del abandono escolar y ampliar las metodologías educativas apoyándose también en la educación no formal, el arte y la cultura. En otros casos, trabajan para restaurar los derechos vulnerados.⁵⁸

56 Esta limitación la ponen de manifiesto sobre todo las asociaciones y movimientos de jóvenes de origen extranjero en España e Italia que reivindican la necesidad de descolonizar el sistema educativo y formativo. Ver las fichas técnicas dedicadas a *Questa è Roma* (Italia) y *CNNAE* (España).

57 Las iniciativas generalmente operan en dos frentes: garantizar el acceso al sistema educativo y combatir la deserción escolar de los inmigrantes y refugiados. Por ejemplo, *Trama di Terre* (Italia) o *RefugEduCare* en Grecia participan en actividades extraescolares con estudiantes inmigrantes y refugiados para combatir el abandono escolar.

58 Este es por ejemplo el caso de *ASGI* que en Italia ha promovido numerosos recursos antidiscriminatorios para proteger los derechos de los estudiantes extranjeros, a menudo víctimas de actos discriminatorios institucionales que tienden a excluirlos del acceso a determinados servicios escolares como el transporte o el comedor.

Educación. La agenda social

- Promover cursos de actualización y formación de docentes para fortalecer la capacidad de las escuelas para ofrecer una adecuada inclusión escolar a los alumnos y alumnas de origen extranjero.
- Revisar los currículos escolares desde una perspectiva intercultural.
- Contrarrestar fenómenos de concentración escolar y educativa a través de una orientación escolar focalizada que considere las capacidades y deseos de los estudiantes y que involucre, cuando sea necesario, también a las familias.
- Desarrollar actividades educativas extraescolares, también gracias a la colaboración e interacción con las familias y realidades sociales de la zona.
- Dotar a las instituciones educativas de servicios de mediación cultural, médicos y psicólogos que puedan ofrecer intervenciones personalizadas a los niños/as desde un punto de vista interdisciplinar.
- Crear observatorios especiales para monitorear las formas de discriminación y racismo que ocurren diariamente dentro del mundo escolar.

Salud

El reconocimiento de la salud como un derecho humano obliga a los estados a garantizar el acceso a cualquier persona a los establecimientos y servicios de salud, asegurando la calidad, oportunidad y la adecuación desde una perspectiva cultural y de género, sin discriminación y con atención específica a las personas más vulnerables.⁵⁹

La fase de pandemia ha puesto de manifiesto de forma espectacular cómo el respeto efectivo de los principios de igualdad y no discriminación en el acceso a la atención sanitaria es crucial para detener la propagación del virus y garantizar la salud de todos. Pero las entrevistas realizadas en los países encuestados reportaron los siguientes aspectos críticos.

En la primera fase de la pandemia se presentó un déficit de información y prevención en salud con referencia a los migrantes alojados en proyectos de acogida, “puntos calientes” y centros de detención. La elaboración de los protocolos sanitarios específicos a adoptar en los diferentes tipos de establecimientos fue tardía.

En una segunda fase, el problema era garantizar el acceso a la campaña de

59 Véase: OMS, *Human rights and health* (who.int)

vacunación a todos los ciudadanos extranjeros presentes en el territorio, independientemente de su estatus administrativo.

Por ejemplo, en Italia la vacunación se hizo efectivamente accesible a los extranjeros no registrados en el servicio nacional de salud solo como resultado de acuerdos nacidos de la colaboración entre asociaciones de migrantes, sindicatos y comités locales con algunas regiones. A estas dificultades se le han sumado factores estructurales que, aunque de manera diferente según los países, socavan el pleno acceso a los servicios públicos de salud de los extranjeros que no cuentan con permiso de residencia. Estos aspectos críticos específicos afectan especialmente a la garantía del derecho a la salud de los extranjeros vulnerables: trabajadores agrícolas temporales, personas sin hogar, enfermos crónicos y personas con diversidad funcional.

Se siguen registrando numerosas violaciones al derecho a la salud en los centros de detención, donde existen casos de asistencia tardía, que han tenido graves consecuencias para los pacientes, y a menudo acompañados por el uso excesivo de psicofármacos.

Falta un enfoque transcultural para la organización, gestión y prestación de servicios de salud. La presencia de médicos, trabajadores de la salud de origen extranjero y mediadores culturales en los sistemas públicos de salud es aún muy limitada. El acceso a profesiones en el ámbito la salud de ciudadanos extranjeros de terceros países se ve dificultado, por un lado, por las dificultades en el reconocimiento de sus títulos y, por otro, por la normativa, las prácticas administrativas y las convocatorias públicas de personal sanitario. Además, persiste una disparidad de trato en materia de remuneración, que en promedio es inferior a la garantizada al personal nativo.

Varias asociaciones y movimientos sociales entrevistados están tratando de intervenir para superar, al menos parcialmente, estas desigualdades en el sector de la salud.

Se han impulsado campañas de información sobre el derecho a la salud en general y sobre las normas de prevención sanitaria anti-Covid, por ejemplo, en Italia.⁶⁰

La provisión directa de asistencia médica a inmigrantes indocumentados no cubiertos por el servicio nacional de salud y a las personas vulnerables es una segunda área de actuación que, como en el caso del MEDU, también puede sensi-

⁶⁰ Particularmente activos en esta área son *Naga of Milan* y *Ex-Canapificio* de Caserta Caserta en Italia y *Fruita amb Justicia Social*, en el territorio de Lerida, y *Espacio del Migrante* de Barcelona, en España (ver el informe nacional).

bilizar sobre formas de explotación laboral, malas condiciones de vivienda y otras formas de discriminación.⁶¹

La asistencia legal y la promoción de acciones de defensa contra los requisitos discriminatorios que caracterizan el acceso a las profesiones en el ámbito de la salud representa otra área de actuación.⁶²

Salud. La Agenda Social

- Garantizar el tratamiento y el acceso a los servicios de salud para todas las personas, sin discriminación, incluidos los extranjeros sin permiso de residencia.
- Fortalecer los servicios de asistencia psicológica para víctimas de tortura y mujeres víctimas de violencia.
- Prestar servicios con mediadores lingüísticos y culturales para facilitar la correcta información a los/las usuarios/as y la comprensión de sus necesidades de salud.
- Asignar mayores recursos a los establecimientos médicos territoriales, incluidas las unidades móviles, para garantizar una atención en salud oportuna y adecuada, cercana a las necesidades de los/las pacientes.
- Facilitar el reconocimiento de cualificaciones educativas y profesionales adquiridos en el país de origen y eliminar el requisito de ciudadanía en los procesos de contratación de personal de salud pública.

Medios y cultura

Los medios de comunicación tradicionales y los nuevos sistemas de comunicación de masas en línea desempeñan un papel decisivo en la configuración de las formas en que los inmigrantes y las minorías tienden a estar representados en el debate público.

61 *MEDU-Médicos por los Derechos Humanos* (ver apartado de iniciativas seleccionadas) es una organización que comenzó brindando atención médica a las personas más vulnerables. Se dieron cuenta de que al brindar esta ayuda tenían una posición privilegiada para comprender otros problemas sociales que estos grupos vulnerables enfrentaban superpuestos, como el trabajo, la explotación, la vivienda, etc. Como resultado, esta organización recopiló información para abordar estos y lanzó iniciativas de promoción dirigidas por migrantes. MEDU es un buen ejemplo para entender y contrarrestar iniciativas discriminatorias.

62 También en Italia, Asgi y AARMI han sido especialmente activas en este campo durante la primera fase de la pandemia.

Los datos y estudios disponibles muestran muy claramente que estas representaciones tienen dos características principales: por un lado, están fuertemente condicionados por la estrecha relación que el sistema mediático tradicional tiene con el mundo de la política; por otro lado, los medios rara vez dan voz directa a los migrantes, refugiados y minorías que se ven afectadas por la discriminación. La recurrencia de estos dos elementos hace que las narrativas mediáticas dominantes relacionadas con la migración y las minorías extranjeras tiendan a reproducir, a menudo acríticamente, los argumentos propuestos por la política y, de este modo, a alimentar la polarización del debate público. Esto sucede debido a un sector de noticias que enfatiza la problemática de la presencia extranjera y al uso frecuente de un vocabulario estigmatizante.

La recurrente asociación de la migración con el concepto de crisis y emergencia, producida y reproducida en el debate político y en los medios de comunicación, rebota en las redes sociales y adquiere el consentimiento de una parte importante de la opinión pública.

La apropiación, por algunos actores institucionales y representantes de partidos políticos, de algunas consignas y objetivos políticos desarrollados por movimientos antirracistas, tiene el efecto de institucionalizar, instrumentalizar y por ende desapoderando algunas ideas y categorizaciones de competencia política. Tal instrumentalización política contribuye a banalizar y normalizar el racismo, recurriendo también a las estrategias líquidas de la comunicación política actual.

Las entrevistas realizadas en los países examinados muestran una pluralidad de campañas e iniciativas promovidas por movimientos de migrantes autoorganizados y organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de deconstruir las narrativas mediáticas dominantes sobre las migraciones y las minorías. Un punto de partida compartido es la convicción de que la información precisa requiere la producción de narrativas autónomas alternativas, producidas directamente por migrantes, refugiados y personas que experimentan el racismo en primera persona.

El rechazo a una relación con el mundo de la información mediada por terceros (actores políticos e institucionales, pero también asociaciones antirracistas formadas mayoritariamente por “nacionales”) surge con mucha evidencia especialmente, como pasa en España e Italia, donde el activismo de jóvenes descendientes de la inmigración muestra un fuerte dinamismo y se identifica con la subestimación/eliminación de mecanismos estructurales del racismo por parte de asociaciones históricas antirracistas, vistas como una de las causas de la desinformación. El reto que plantean estas realidades es, por tanto, contar su historia no como “víctimas” de la discriminación, sino como nuevos actores de la transfor-

mación social, también gracias al uso consciente y sabio de las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías. La autoproducción de videos, blogs, mapas y plataformas de información en línea apoyan campañas destinadas a denunciar la discriminación institucional y el racismo estructural.⁶³

En otros casos, el storytelling y el activismo en redes sociales sirven para deconstruir y desenmascarar información errónea y exigir visibilidad directa de las voces de las personas racializadas en los principales medios de comunicación (prensa diaria y televisión).⁶⁴

Grupos de periodistas y escritores nacidos en el extranjero promueven acciones de incidencia dirigidas específicamente a transformar el sistema de medios de comunicación desde adentro, exigiendo una mayor apertura de la profesión periodística a la entrada de profesionales extranjeros y nacidos en el extranjero en las plantillas de las redacciones.⁶⁵

Finalmente, el arte, el teatro, la música y la literatura son lenguajes expresivos que sirven para construir un nuevo imaginario político-cultural, entre diferentes públicos alejados del mundo antirracista.

63 Por ejemplo, en España, la Campaña *El Racismo Sale de Fiesta* en 2018 produjo cinco vídeos cortos para denunciar el problema de la discriminación racista en el ocio, lo que fomentó un aumento de las denuncias, el reconocimiento del problema por parte de la Generalitat de Catalunya y la redacción de un protocolo de intervención específico dirigido a la policía catalana. Por otro lado, la campaña *(Re)Acciona*, realizada en Instagram en 2020, tuvo como objetivo ser testigo de casos de racismo diarios denunciados en línea. La campaña *Las Kellys* ha autoproducido un vídeo documental sobre la explotación laboral en los hoteles, utilizándolo en iniciativas de incidencia política dirigidas al Parlamento español e instituciones europeas con el objetivo de regularizar los contratos de trabajo en este sector.

64 En Italia, el movimiento *Italianisenza cittadinanza*, inmerso en una campaña destinada a reformar la ley de ciudadanía, trabaja mucho la autorrepresentación a través de la narración de historias, tanto en las redes sociales como con los medios tradicionales. Los jóvenes del movimiento Italia No al discurso de odio están activos con campañas temáticas de información y sensibilización en línea contra la propagación del odio en línea. No entrevistada, pero muy activa en la formación de periodistas y escuelas de periodismo, también está la asociación de segundo nivel *Carta di Roma* (de la que Lunaria es miembro).

65 La red de periodistas y escritores afrodescendientes que colabora con la asociación *Razzismo brutta storia* y la asociación *Questa è Roma* ha impulsado iniciativas muy eficaces con el objetivo de descolonizar el mundo de la cultura y el lenguaje mediático y promover la presencia de autores de origen extranjero. origen, especialmente afrodescendientes, en algunos medios de comunicación.

Medios y Cultura. La agenda social

- Eliminar, en el caso de que existan, requisitos discriminatorios que dificulten el acceso a la profesión periodística y promover una mayor presencia de profesionales extranjeros y nacidos en el extranjero en las redacciones de los diarios y la televisión pública.
- Aumentar la visibilidad de las opiniones y las historias de los migrantes, refugiados y personas racializadas en los medios de comunicación, protegiendo al mismo tiempo su seguridad.
- Intensificar las iniciativas de formación de periodistas y estudiantes de las escuelas de periodismo dedicadas a promover información veraz sobre personas migrantes, refugiadas, gitanas y de origen extranjero, involucrando a profesionales de estos colectivos como docentes.
- Fomentar y apoyar iniciativas autónomas de autoinforme, comunicación y denuncia de formas institucionales y estructurales de racismo promovidas por activistas migrantes, refugiados y nacidos en el extranjero.

2.4. De la participación al liderazgo

El problema de una participación política de ciudadanos extranjeros predominantemente mediada por organizaciones del tercer sector ha sido ampliamente debatido en el movimiento antirracista europeo e investigado por muchos estudios de campo. Casi siempre ha surgido con mayor intensidad precisamente en las etapas en las que la demanda de liderazgo por parte de los movimientos y asociaciones de ciudadanos inmigrantes o nacidos en el extranjero ha sido más fuerte. De hecho, la participación activa de las personas migrantes y racializadas en los movimientos antirracistas es un requisito previo para llevar a cabo acciones de incidencia que desemboquen en políticas más sólidas y eficaces.

Durante la investigación, tratamos de comprender en qué medida y cómo el tema de la participación y protagonismo de las personas migrantes y racializadas atraviesa el debate interno y las prácticas de los contextos sociales estudiados; cuáles son los obstáculos que impiden la participación plena e igualitaria en el espacio público y el incremento del liderazgo de las personas racializadas en el movimiento antirracista; si existen modelos de organización y relaciones que lo faciliten.

Surgieron puntos de vista y enfoques muy diferentes, atribuibles a la especificidad de los contextos sociales nacionales y a la heterogeneidad de las formas organizativas, de la historia, de la composición “nacional” y generacional de la base social, y de los grupos dirigentes de las realidades entrevistadas. El tema de la participación social y política parece tomar diferentes connotaciones según se trate de inmigrantes de primera generación o de jóvenes descendientes de la inmigración, que no han conocido la experiencia de la migración y en muchos casos son ciudadanos europeos. El tema de la participación también se orienta de diferentes maneras en realidades sociales autoorganizadas, por un lado, y en organizaciones del tercer sector más estructuradas, generalmente fundadas por activistas nativos, por el otro.

La altísima demanda de participación, pero sobre todo de liderazgo, **de los jóvenes de origen extranjero nacidos y/o criados en Europa** y de las personas racializadas se expresa claramente en España e Italia, poniendo de manifiesto una relación compleja, en algunos casos conflictiva, con las organizaciones históricas antirracistas.

En España, por ejemplo, el antirracismo liderado por personas racializadas ha crecido en los últimos años, al menos en algunas partes del país (Madrid, Barcelona, etc.). Estos movimientos, antes considerados movimientos informales y “antisiste-

ma”, son cada vez más reconocidos como interlocutores necesarios y legítimos por otros actores e instituciones de la sociedad civil. La constatación de que no es posible hablar de racismo y antirracismo sin personas racializadas ha echado raíces en una parte relevante de la sociedad civil y de los partidos políticos.⁶⁶

La petición de una mayor escucha y el problema de la falta de reconocimiento político de las nuevas subjetividades antirracistas fundadas en los últimos años por jóvenes de origen extranjero, de los conocimientos y atributos de los llamados jóvenes de segunda generación, están emergiendo claramente también en Italia. Entre ellas, las asociaciones G2, Questa è Roma y el movimiento #italianisenzacittadinanza son particularmente activas. El rechazo de formas de participación percibidas como oportunistas o instrumentales; la necesidad de tomar una voz sin mediaciones y de utilizar lenguajes y formas de expresión diferentes a las tradicionalmente propias del activismo antirracista; el deseo de proponer narrativas autónomas, independientes y alternativas a las dominantes en el debate público y denunciar claramente las diversas formas de racismo estructural e institucional están en el centro de las reivindicaciones de estos movimientos.⁶⁷ Sin embargo, experiencias de este tipo aún no parecen estar consolidadas en Grecia y Malta.

Para los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados recién llegados, el tema es el de la presencia de una **multiplicidad de obstáculos** subjetivos y estructurales a la participación social y política que son comunes a los cuatro países involucrados en la investigación.

La precariedad jurídica y administrativa de muchos extranjeros les induce a no exponerse, cuando, por ejemplo, se ven afectados por la discriminación institucional o la violencia racista o se encuentran en centros de detención, y limita su activismo político. La incertidumbre de la vida cotidiana, la burocracia y los diversos problemas concretos que tienen que enfrentar dejan poco espacio para la acción colectiva.

La alta movilidad territorial que caracteriza especialmente la primera fase de la experiencia migratoria y las fuertes limitaciones a la autonomía de los solicitantes de asilo alojados en centros de acogida gubernamentales, dificultan un compromiso social y político directo de las personas migrantes y solicitantes de asilo por sus derechos. Esto es particularmente cierto para los inmigrantes que consideran a Italia, Grecia y Malta como países de tránsito.

66 Sos Racisme, “Social priorities, participation, and advocacy practices. The experience of 20 Spanish antiracist realities”, mencionada anteriormente, p. 11.

67 Lunaria, “Social priorities, participation, and advocacy practices. The experience of 20 Italian antiracist realities”, mencionada anteriormente, p. 40-45 and 57-59.

La precariedad de las condiciones de vivienda y trabajo mantiene los problemas materiales en primer plano. En particular, en Italia, la explotación que caracteriza a algunos segmentos de la mano de obra migrante, especialmente en el campo, en el trabajo de cuidados y en la logística, caracterizada por una gran presencia de trabajo no declarado, hace que los/las trabajadores/as extranjeros/as sean muy susceptibles al chantaje por parte de los empleadores y limita fuertemente la posibilidad de su participación política.

Los obstáculos antes mencionados en realidad se originan en la limitación estructural que reside en el *sistema securitario y prohibicionista* de las políticas migratorias y de asilo adoptadas en todos los países involucrados en la investigación. Es la propia legislación la que, asumiendo como prioridad la “contención” de la migración y manteniendo un modelo de ciudadanía basado en la estrecha vinculación entre la garantía de los derechos civiles, sociales y políticos y la nacionalidad, tiende a producir y reproducir situaciones institucionales discriminatorias.

Desde el punto de vista de las asociaciones antirracistas tradicionales dedicadas a la acogida e inserción social de personas migrantes y refugiadas, la necesidad de operar muchas veces en situaciones de emergencia, implica ritmos de trabajo muy intensos, la dificultad de establecer relaciones de confianza con las personas migrantes y solicitantes de asilo, la falta de personal y recursos que puedan dedicarse al cuidado de la vida asociativa y la organización de iniciativas de activismo, movilización social e incidencia política.⁶⁸

Una interpretación más política de las causas que dificultan la participación y el liderazgo en el movimiento antirracista surge de activistas de origen extranjero y/o personas racializadas que forman parte de asociaciones y movimientos autoorganizados, particularmente en España e Italia. Estas realidades tienden a centrar la atención en las raíces estructurales e institucionales del racismo y ponen de manifiesto la existencia de un problema sistémico y cultural que trasciende los sistemas institucionales y políticos, pero que también condiciona la acción política del movimiento histórico antirracista.⁶⁹

Las prácticas racistas institucionales están legitimadas en muchos casos a nivel normativo por la legislación de extranjería y representan en sí mismas una limitación estructural para la acción de incidencia de los movimientos antirracistas.

68 Este tipo de obstáculos ha sido informado por Medu, Naga y Refugees Welcome en Italia; Terres des Hommes y Arsís en Grecia y por la mayoría de los entrevistados en Malta.

69 La campaña #RegularizaciónYa, the Comunidad Negra Afrodescendiente y Africana – CNNAE, the Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes en España y Questa è Roma, Razzismo brutta storia el movimiento #italianisenzacittadinanza en Italia han subrayado la problemática relación con las organizaciones antirracistas más antiguas.

Como se explicó en la subsección anterior, el racismo es un eje constitutivo del estado nación y, como tal, “reformular” las prácticas racistas es extremadamente complejo y las pequeñas victorias requieren grandes esfuerzos.

La construcción de un discurso político autónomo e independiente. La necesidad de que los colectivos antirracistas trabajen, ante las graves violaciones de derechos, desde la emergencia y en el corto plazo, implica la concentración de energías para poner fin, o al menos detener, prácticas institucionales discriminatorias, poniendo en un segundo plano la construcción de propuestas y estrategias de acción “radicalmente diferentes” y transformadoras.

La instrumentalización del discurso antirracista. En los últimos años, paralelamente a la legitimación social e institucional del discurso antirracista, algunos gobiernos y partidos políticos han contribuido a este discurso, institucionalizando conceptos y categorías desarrolladas por movimientos que, así, pierden fuerza y capacidad para producir cambios políticos. Por ejemplo, en España algunas administraciones locales han llevado a cabo campañas antirracistas institucionales, manteniendo prácticas discriminatorias (por ejemplo, perfiles raciales). En Italia, algunos partidos batallaron por la reforma de la ley de ciudadanía a nivel programático, pero luego no apoyaron la aprobación de la reforma cuando se votó en el Parlamento. El riesgo es la banalización del antirracismo que puede invalidar los esfuerzos realizados por la sociedad civil para desencadenar cambios sociales y, en consecuencia, desalentar la participación y el activismo social y político.

Antirracismo “blanco”, eurocéntrico y paternalista. Dentro de los movimientos autoorganizados españoles, pero también en algunos movimientos italianos fundados por jóvenes negros extranjeros, existe una fuerte crítica al “privilegio blanco” de los actores de la sociedad civil y los movimientos antirracistas. Una interpretación paternalista y eurocéntrica del racismo y su relación con la política complica la integración de la lucha antirracista de los movimientos sociales. De manera similar, la ocupación acrítica de espacios políticos por parte de movimientos y organizaciones compuestas predominantemente por organizaciones antirracistas fundadas por activistas nativos supone una limitación adicional para las iniciativas de incidencia antirracista.

Recursos y participación. Los espacios autogestionados dependen del trabajo de los activistas para llevar a cabo sus iniciativas. La disponibilidad de tiempo y recursos para la acción política activista puede variar con el tiempo, dependiendo de las circunstancias personales de los involucrados.

Segregación del compromiso político. Activistas de segunda generación de origen extranjero exigen un reconocimiento político que no se limite al ámbito de las po-

líticas migratorias o la lucha contra el racismo. En Italia, por ejemplo, ha surgido claramente la reivindicación de un papel político activo en todos los ámbitos de interés colectivo: desde la lucha contra las desigualdades sociales y económicas, hasta la de género, pasando por las luchas por un trabajo digno y por el bienestar universal.

El análisis cuidadoso y diferenciado de las causas que impiden el desarrollo y la consolidación de un movimiento antirracista nacional y europeo liderado por migrantes, refugiados y personas racializadas genera respuestas igualmente heterogéneas sobre las soluciones para facilitarlas.

La participación parece estar facilitada por la escucha, la construcción de relaciones sociales y la autoorganización, que sólo pueden desarrollarse plenamente dentro de espacios colectivos bien identificados, tanto físicos como virtuales, y siguiendo metodologías y tiempos no heterodirigidos.

La gestión directa o indirecta de servicios básicos o espacios colectivos es fundamental para construir movimientos por la promoción de los derechos. Estos espacios colectivos servirán para identificar a través de la escucha las necesidades sociales prioritarias sobre las cuales abrir disputas o campañas de incidencia e iniciar procesos de participación real y liderazgo político.

Los servicios por sí solos (incluso cuando son autoorganizados) no generan automáticamente una participación directa en el activismo político. Es necesario acompañarlos de un proceso interno de relacionamiento permanente (reuniones periódicas fijadas en horarios compaginables con el trabajo, discusiones grupales, participación en momentos de esparcimiento, apertura de chats para el intercambio diario de información, encuestas sociales) y con momentos de activismo político público para incentivar la estructuración de una pertenencia e identidad colectiva. En las realidades de los movimientos autoorganizados, esto parece suceder de manera más espontánea.

La importancia de la disponibilidad de **espacios colectivos autogestionados** se manifestó en todos los contextos involucrados en la investigación. Aunque en Malta el hecho se define esencialmente en términos de una carencia que aún no tiene respuesta, en Italia, España y en diferente medida en Grecia, no faltan experiencias ya vividas.

En **Grecia**, el Foro Griego de Migrantes, el Foro Griego de Refugiados y la Generación 2.0 son realidades compuestas principalmente por migrantes o que involucran directamente a refugiados/migrantes en sus iniciativas de incidencia política. En muchos casos, estas funcionan como redes para las comunidades locales de refugiados o migrantes y dan voz a sus necesidades, a través del contacto

directo con las propias comunidades. Ejemplos de incidencia política autoorganizada son los proyectos de vivienda, en su mayoría provenientes del espacio anarquista. En estos casos, los refugiados se desplazan desde la periferia hacia el centro de la ciudad, en un intento de alejarse de los campamentos, integrarse al tejido urbano e independizarse de los beneficios y del modelo de vida impuestos por el sistema de acogida gubernamental. Estas iniciativas enmarcan los ideales de movimientos autoorganizados, antifascistas y antirracistas.⁷⁰

En España, los espacios autogestionados de personas migrantes y racializadas han impulsado acciones de incidencia política de forma autónoma. Esto les ha permitido: abrir espacios políticos propositivos, a nivel local o incluso nacional, liderados únicamente por personas migrantes y racializadas; mantener su propia agenda antirracista sin tener que apoyar la de otros actores de la sociedad civil, o en todo caso obteniendo apoyo del exterior; diseñar acciones de incidencia política a partir de la definición de sus propias metas y narrativas, construidas desde los márgenes del sistema político y lejos de una concepción colonial del antirracismo; contribuir al cambio del discurso social sobre la inmigración transformando a las “víctimas” del racismo en actores de transformación social.

La investigación diferencio espacios y redes de activismo autogestionado a nivel local, regional y/o nacional; plataformas a nivel local y campañas. La mayoría de estos espacios funcionan gracias al trabajo activista de los miembros y al autofinanciamiento de la acción política. En general, estos espacios toman sus decisiones de forma asamblearia y se organizan en grupos o áreas de trabajo para llevar a cabo sus iniciativas. Solo en unos pocos casos se han llevado a cabo campañas de incidencia política utilizando recursos técnicos y financieros de organizaciones de la sociedad civil. Las experiencias consideradas se refieren principalmente a espacios de trabajo no mixtos (autoorganizados, construidos y liderados por personas migrantes y racializadas) y solo en contados casos a espacios mixtos (donde participan tanto personas racializadas como activistas indígenas) donde, sin embargo, las personas racializadas tienen o han tenido un papel activo en el diseño o implementación de acciones políticas.

La existencia de espacios de trabajo antirracistas no mixtos se ve como una necesidad, para que las personas racializadas cuenten con entornos seguros donde puedan compartir la violencia que han vivido y construir sus propias narrativas y estrategias. Prevalece la creencia de que en los espacios de trabajo “mixtos” tien-

70 Antigone, “Social priorities, participation, and advocacy practices. The experience of 20 Greek antiracist realities”, mencionado anteriormente, p.23-25.

den a reproducirse dinámicas de poder y jerarquías raciales y no se comprenden cabalmente las luchas de las personas racializadas, lo que genera malestar y cuestiona el funcionamiento de esos espacios.

La situación en **Italia** es más compleja y particular. Aunque la creación de espacios colectivos se considera central para fortalecer el movimiento antirracista y su incidencia política, junto a realidades que reivindican espacios colectivos autónomos y que denuncian la necesidad de “descolonizar” el antirracismo, como *Razzismo brutta storia* y *Questa è Roma*, hay espacios colectivos nacidos desde sus orígenes como espacios mestizos, gestionados de forma igualitaria. La importancia de tener lugares físicos para socializar, compartir y crecer políticamente se considera central, pero no implica necesariamente el reclamo de “espacios” autoorganizados separados. Ejemplar desde este punto de vista es la experiencia de *Trama di terre*, una asociación de mujeres comprometidas con los temas de género que reúne italianos, mujeres extranjeras y nacidas en el extranjero en la gestión de algunos servicios y en la dirección que deben llevar las luchas políticas. La experiencia del *Ex Canapificio* de Caserta ofrece otro ejemplo. Un caso diferente es el movimiento de *#italianisenzacittadinanza* que, si bien opta por la autoorganización, colabora con muchas asociaciones antirracistas tradicionales, buscando su apoyo para sus iniciativas, pero manteniendo el liderazgo de su estrategia de incidencia política.

Las asociaciones antirracistas tradicionales parecen ser conscientes de la necesidad de cambiar sus estrategias de defensa y los sistemas de democracia y representación interna, pero el diagnóstico del problema no parece ir acompañado, al menos por el momento, de una reflexión suficientemente madura sobre posibles soluciones. La organización de grupos focales, mesas redondas, grupos de autodefensa, talleres informativos sobre derechos, eventos públicos con disertantes migrantes o refugiados, visitas a los campamentos donde se alojan solicitantes de asilo así como la inclusión de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados entre el personal representan las principales herramientas identificadas para facilitar la participación de las personas migrantes y refugiadas en las iniciativas de promoción de políticas promovidas por las asociaciones antirracistas griegas. El apoyo del asociacionismo a las iniciativas promovidas por personas migrantes y refugiadas es otra modalidad de intervención relevante experimentada en España, Italia y Grecia.

En particular, destacamos el apoyo de las asociaciones italianas a las nuevas campañas sobre ciudadanía promovidas por G2, por *#italiansenzacittadinanza* y por *Connigi*; el apoyo de asociaciones antirracistas españolas a la campaña *#Regu-*

larizaciónYa y de organizaciones griegas a la protesta de Moria, que estalló como resultado de las pésimas condiciones de vida en el campo. Organizaciones como Lesbos Solidarity apoyan estas iniciativas espontáneas difundiendo sus voces en los medios de comunicación.

Finalmente, cabe señalar que la relevancia de la dimensión formal de participación (que involucra el tema de la representación y la democracia interna) surgieron en pocos casos, que coinciden, además, con las asociaciones del tercer sector que ya cuentan con ciudadanos de origen extranjero en sus órganos de gobierno o con experiencias compartidas con movimientos autoorganizados. Esto parece confirmar la existencia de un problema de relaciones no resueltas entre las viejas y las nuevas subjetividades del movimiento, que puede derivar de la dificultad de cuestionar las culturas organizacionales consolidadas, pero también de la falta de competencias profesionales y metodologías de trabajo innovadoras. Desde este punto de vista, algunas organizaciones italianas como 21luglio y ActionAid parecen encontrar un referente teórico (explícito en el primer caso, no declarado en el segundo) en la metodología de organización comunitaria de Saul Alinsky⁷¹ que invita a impulsar procesos de escucha activa y construcción de liderazgo para impulsar el cambio social.

71 Saul Alinsky, *Radicali, all'azione! Organizzare i senza-potere (Reveille for Radicals)*, Edizioni dell'Asino, 2020.

PARTE 3.

Experiencias en incidencia política impulsadas por inmigrantes, refugiados, ONG y movimientos sociales en cuatro países europeos. Algunos ejemplos

ESPAÑA

#RegularizaciónYa [#RegularizationNow]

Campo de intervención: derecho de extranjería

Lugar: España

Sitio web: regularizacionya.com

La campaña

La campaña fue impulsada por diferentes espacios, colectivos y activistas antirracistas de todo el Estado español, como respuesta al agravio comparativo que la pandemia de la COVID ha producido en las personas migrantes y refugiadas (y especialmente aquellas en situación irregular) en 2020. La campaña recibió el apoyo de más de 1500 asociaciones y espacios de activismo activo de toda España.

Las principales necesidades sociales.

La situación generada por la pandemia del coronavirus en 2020 reveló posteriormente que la población migrante y refugiada fue la que más sufrió los efectos de las políticas de austeridad y recortes en las políticas públicas en los sectores sanitario, social, laboral y económico, practicadas por las administraciones españolas en la última década: especialmente las casi 600.000 personas que se encuentran en situación administrativa irregular. En este sentido, la campaña denuncia y propone medidas legales contra las condiciones laborales precarias, la desprotección y la explotación de los trabajadores migrantes, así como respecto a otras manifestaciones de racismo estructural (el manifiesto de la campaña está disponible en: regularizacionya.com).

La misión y agenda política

La campaña exigió al gobierno español, entre otras cosas:

- La regularización permanente extraordinaria de todas las personas en situación administrativa irregular en el Estado español, poniendo en el centro de la escena los derechos jurídicos que deben garantizarse a las personas migrantes.

-
- La resolución favorable e inmediata de todas las solicitudes de asilo y protección internacional en proceso de revisión.
 - La resolución favorable de todas las autorizaciones de residencia y trabajo presentadas en las oficinas de extranjería que se encuentren pendientes de resolución o en procedimientos administrativos.
 - La resolución favorable de todas las solicitudes de renovación de residencia y permisos de trabajo, independientemente de los requisitos mínimos de tiempo y sin la necesidad de presentar un contrato de trabajo vigente.
 - La priorización del derecho a la vida familiar en los procedimientos de reagrupación familiar y residencia de los menores nacidos en España y fuera de ella.
 - La liberación inmediata de todas las personas internadas en Centros de Detención para Migrantes [Centros de Internamiento de Extranjeros] (CIEs).
 - El traslado de personas que se encuentren en los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla para garantizar su salud, así como sus derechos.
 - El fin de las “devoluciones en caliente” y de las deportaciones expresas de migrantes a las personas que lleguen a Ceuta y Melilla.

El proceso participativo

La campaña fue promovida, coordinada y dinamizada directamente por migrantes y grupos racializados y antirracistas de todo el estado, que trabajaban de manera horizontal y asamblearia, principalmente a través de canales de comunicación en redes sociales. Mediante la voz de la propia campaña: “esta vez serán los migrantes quienes tomarán las riendas en la lucha por nuestros derechos”. En un principio, un centenar de colectivos escribieron una carta al gobierno español, que constituyó el centro de la agenda política de este movimiento. A partir de allí, los impulsores de la #RegularizaciónYa organizaron un debate social dentro y fuera de las comunidades, para afinar sus objetivos políticos y organizarse a pesar de la limitación de recursos materiales. Los/las activistas llevaron a cabo todo el trabajo.

La experiencia en incidencia política

La campaña promovió la presentación de una Moción Parlamentaria No Legislativa (Proposición No de Ley por la regularización) para la regularización urgente, incondicional y permanente de las personas en situación irregular, en el Congreso de los Diputados de España. Gracias a un esfuerzo conjunto de incidencia política

a nivel español, en muy poco tiempo se obtuvo el apoyo político de ocho grupos parlamentarios, y finalmente la Moción se presentó en el Congreso. El vínculo con una diputada migrante que pasó varios años sin papeles en España fue un factor clave en este sentido. Estas acciones de incidencia política hicieron posible colocar #RegularizacionYa y el racismo estructural en el debate político. Lamentablemente, en septiembre de 2020 el Congreso rechazó la propuesta, votando en contra PSOE, PNV, Ciudadanos, VOX y el Partido Popular. En cualquier caso, esta acción supuso un avance muy significativo en la visibilización y construcción de estrategias de incidencia política compartidas e impulsadas directamente por las comunidades de personas migrantes y racializadas en España.

Comunidad Negra Afrodescendiente y Africana - CNNAE

[Afro-descendant and African Black Community]

Campo de intervención: racismo policial

Lugar: España

Sitio web: cnaae.org

La asociación

La CNNAE se define como una asociación de la comunidad negra africana y afrodescendiente de España, como espacio de promoción de políticas para erradicar el racismo estructural e impulsar el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de las personas africanas y afrodescendientes residentes en el país. Este espacio se organizó a partir de las manifestaciones celebradas en junio de 2020 en muchos municipios de España (entre ellos Madrid, Bilbao, Barcelona, Málaga, Zaragoza, Mallorca, etc.) para denunciar el asesinato racista de George Floyd a manos de un agente de la Policía de Minneapolis, en Estados Unidos. Está formado por activistas que trabajan en delegaciones territoriales ubicadas en ocho comunidades autónomas diferentes.

Las principales necesidades sociales

Reconocer los derechos colectivos de la comunidad negra africana y afrodescendiente en igualdad de condiciones con el resto de la población del Estado español.

La misión y agenda política

Los principales objetivos son, entre otros:

- Impulsar una ley integral contra el racismo que garantice los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas de raza negra y afrodescendientes en España.
- Garantizar los derechos laborales de las personas negras que viven en situación de explotación laboral, vivienda precaria, etc.
- Obtener la regularización permanente e incondicional de todos los migrantes y refugiados, así como la derogación de la Ley de Extranjería y el cierre definitivo de los diferentes Centros de Internamiento de Extranjeros.
- Impulsar procesos de memoria histórica desde una perspectiva anticolonial y antiesclavista que tengan como ejes principales la verdad, la justicia y la reparación.
- Promover políticas educativas e incorporar contenidos en el currículo educa-

tivo sobre la historia y cultura de los pueblos negros, africanos y poblaciones afrodescendientes.

El proceso participativo

A pesar de que la comunidad afrodescendiente lleva años abogando para que se garanticen sus derechos, la respuesta a estas demandas de los actores políticos tradicionales no ha producido cambios estructurales, sino que estos reclamos han sido tergiversados o explotados por las administraciones, partidos políticos e incluso actores de la sociedad civil no racializados. Por ello, CNNEA se organizó como un espacio por y para negros, desde el que diseñar y liderar sus propias luchas y crear redes colaborativas y alianzas estratégicas con otros movimientos antirracistas. Internamente, la actividad está organizada por áreas y grupos de trabajo activista (cnaae.org).

La experiencia en incidencia política

El 7 de junio de 2020, la CNNAE organizó una manifestación en diez municipios españoles como reacción a la muerte de George Floyd, y para protestar contra el racismo estructural del Estado español, llegando a una concentración -a pesar de las limitaciones provocadas por COVID19- de más de 3.000 personas tanto en Madrid como en Barcelona. El éxito de la convocatoria permitió posicionar por primera vez en España, a nivel mediático y político, un movimiento autogestionado de afrodescendientes capaz de realizar acciones de incidencia política a nivel estatal hacia instituciones racistas, y la violencia basada en sus agendas políticas, y un movimiento centrado en las necesidades de la comunidad negra. En este sentido, el nacimiento y rápido crecimiento de este espacio representa en sí mismo una experiencia extremadamente productiva (aunque aún en fase inicial) de autoorganización desde la sociedad civil para la incidencia política.

Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes

[People's Union of Street Vendors]

Campo de intervención: trabajo

Lugar: Barcelona, Madrid, Zaragoza

Sitio web: manteros.org

El movimiento

La Unión Popular de Vendedores Ambulantes se organizó en 2015 para crear un espacio de diálogo con la administración pública como respuesta a la represión policial que estaba sufriendo el colectivo de vendedores ambulantes de origen africano tanto en Barcelona como en otros municipios de Cataluña. Es el resultado de un proceso de autoorganización de los mismos vendedores ambulantes, que recibieron el apoyo de otras organizaciones antirracistas y movimientos sociales de Cataluña. Desde su creación ha promovido y participado en numerosas acciones en la calle, como forma de protesta contra el abuso policial, la ley de extranjería, la criminalización mediática del grupo, entre otros temas. A partir de la experiencia de Barcelona, se han organizado sindicatos en ciudades como Madrid y Zaragoza. Actualmente la Unión trabaja en red con grupos de Italia, Alemania y Francia.

Las principales necesidades sociales

El Sindicato surge de la necesidad de mostrar que la venta ambulante es un oficio como cualquier otro, en un contexto caracterizado por la presión institucional y policial ejercida sobre los vendedores y dirigida a controlar y limitar su presencia en el espacio público. A lo largo de los años, el Sindicato ha realizado acciones de resistencia civil para desmitificar la venta ambulante como algo relacionado con la actividad ilegal o mafiosa, así como para visibilizar y denunciar la imposibilidad de la mayoría de los vendedores de acceder al mercado laboral regular, debido a las barreras que representa la legislación migratoria.

La misión y agenda política

Los principales objetivos del sindicato son:

- Abogar por la regularización de los migrantes, en colaboración con otros movimientos antirracistas.
- Ofrecer ayuda mutua entre vendedores ambulantes y establecer alianzas con otros grupos de migrantes y/o personas no blancas.

- Promover la marca de ropa propia del Sindicato (Top Manta) con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los vendedores ambulantes y visibilizar el acoso que sufren.
- Crear conciencia sobre el racismo institucional y las políticas de inmigración racistas.

El proceso participativo

La Unión es un espacio autogestionado para vendedores ambulantes de origen africano. Las decisiones de estrategia y acciones a realizar se toman en forma asamblearia. Desde el inicio de su actividad ha generado alianzas con otros espacios y organizaciones de activismo antirracista como Tras la Manta, Tanquem els CIEs, SOS Racisme, etc.

La experiencia en incidencia política

En 2017 el Sindicato dio vida a la cooperativa Diomcoop (diomcoop.org), formada por personas dedicadas a la venta ambulante no autorizada, y para atender a sus necesidades laborales. La cooperativa -después de un largo proceso de incidencia política- recibió apoyo económico del Ayuntamiento de Barcelona, que aprobó la propuesta del Sindicato en el pleno municipal. Diomcoop contrata a vendedores ambulantes para que regularicen su situación en España: hay 15 cooperativistas, y más de 20 personas fueron contratadas en horas punta. Una de las líneas de trabajo de la cooperativa es la marca de ropa ‘Top Manta’, a través de la cual se visibiliza el discurso político del Sindicato (por ejemplo, uno de los slogans de la marca es “Illegal people legal clothing”: www.topmanta.tienda). En junio de 2021, la cooperativa Top Manta presentó sus primeras zapatillas “kilómetro cero”, fabricadas bajo criterios de sostenibilidad en talleres familiares. Todos los beneficios de la venta de calzado deportivo se destinan a colaborar en la regularización de los vendedores ambulantes.

Parad de Pararme

[Stop Stopping me]

Campo de intervención: racismo policial

Lugar: España (Cataluña-Madrid)

Sitio web: www.paraddepararme.org

La campaña

La campaña fue impulsada entre 2017 y 2019 por una red de más de 30 organizaciones antirracistas activas contra la islamofobia, la violencia policial y en defensa de los Derechos Humanos en Cataluña, con la colaboración de International Rights Spain en Madrid, y el apoyo de Open Society Foundations. Tanto personal técnico como activistas de estas organizaciones participaron directamente en las actividades.

Las principales necesidades sociales

La campaña pretendía visibilizar y denunciar el perfilado racial como criterio normalizado en muchas identificaciones o controles policiales en los que se pide documentación a las personas, seleccionándolas por su aspecto físico y no por lo que han hecho. Estos controles se llevan a cabo de forma generalizada y con total impunidad, tanto en espacios públicos como privados donde se encuentran personas con racializados identificados por la población mayoritaria. Esta es una práctica discriminatoria y racista. A pesar de que las fuerzas de seguridad pública lo justifican como una actuación necesaria para la eficacia de su labor en términos de seguridad, según datos oficiales, más del 74% de las personas identificadas no han cometido ningún delito.

La misión y agenda política

El principal objetivo de la campaña es que las administraciones:

- Reconozcan la dimensión real de los controles policiales guiados por perfiles étnicos y los condenen.
- Tomen medidas encaminadas a prevenir y prohibir la identificación basada en color de piel o características físicas, culturales y religiosas.
- Recopilen datos sobre las acciones de identificación y registro que llevan a cabo (incluidos el motivo, el perfil étnico y el resultado) y publiquen periódicamente estadísticas al respecto.
- Introduzcan medidas de control interno y externo y apliquen sanciones a los agentes que realicen controles policiales de forma discriminatoria e injustificada.
- Faciliten mecanismos de denuncia para la población objeto de arbitrariedad

en las identificaciones y registros, y favorezcan un sistema de control externo de estos procesos.

- Difundan activamente los derechos y garantías de las personas y respondan a sus inquietudes sobre los criterios de identificación policial.

El proceso participativo

La identificación del problema se ha realizado a partir de los casos de perfil racial denunciados en el Servicio de Atención y Denuncia de SOS Racisme Catalunya, y del análisis de las dinámicas discriminatorias de los cuerpos policiales. En este sentido, algunos de los denunciantes han participado activamente en el diseño de las acciones de la campaña y sus materiales (como, por ejemplo, los videos de promoción: www.paraddepararme.org). Además, el equipo técnico y activista de la campaña (vinculado a SOS Racisme) creó una red de alianzas con organizaciones y movimientos sociales de Cataluña, para difundir el contenido de la campaña, y en particular una guía para las víctimas de la discriminación racial, así como testigos de discriminación racial: www.paraddepararme.org.

La experiencia en incidencia política

En el marco de la campaña, se elaboró el informe La apariencia no es motivo, que presenta un análisis de las experiencias recogidas a través del trabajo de observación y recogida de datos públicos de la policía catalana y de la policía local de diferentes municipios sobre las identificaciones policiales. El estudio confirma la práctica sistemática, racista y criminalizadora de este tipo de identificaciones, ya que se detiene a personas de nacionalidad extranjera 7 veces más que a personas de nacionalidad española. Según datos de la policía catalana, el 54,1% de las identificaciones policiales se han realizado a personas de origen extranjero. Teniendo en cuenta que la población extranjera representa el 13,7% de la población total, la ratio muestra un alto índice de desproporcionalidad. El informe fue presentado públicamente en 2019: la información contenida en el informe permitió realizar acciones de incidencia política que resultaron en la elaboración del documento “Propuestas para unas identificaciones policiales no discriminatorias”, por parte de la Oficina por los Derechos Civiles del Gobierno de Cataluña (centre-documentacioap.diba.cat): es el primer documento institucional en Cataluña que aborda abiertamente el problema del sesgo racial en las identificaciones, publicado por una administración encargada de la gestión de las fuerzas policiales. En octubre de 2020 se presentó el documento en la Comisión de Derechos Civiles de la Generalitat de Cataluña.

Fruita amb Justicia Social

[Fruit with Social Justice]

Campo de intervención: trabajo

Lugar: Lérida

Sitio web: frutaambjusticia.wordpress.com

La campaña

La campaña “Fruita amb Justicia Social” fue impulsada en 2018 por varios agentes sociales del territorio leridano, ante la condición de explotación de muchos de los trabajadores de origen extranjero que se desplazan a la ciudad para trabajar en la agroindustria, el principal sector productivo de la provincia. Entre los impulsores de la campaña se encuentran movimientos y organizaciones antirracistas, ONG, organizaciones del ámbito agrario y ambiental y algunos sindicatos.

Las principales necesidades sociales

Cada año, durante la temporada de recogida de frutas en Lleida (junio-agosto), miles de trabajadores inmigrantes duermen en campamentos, cuarteles, en la calle, etc., y deben aceptar unas condiciones laborales injustas y discriminatorias. Esto se debe a que muchas empresas agroindustriales no cumplen con los acuerdos agrícolas, beneficiándose de la legislación migratoria, lo que deja a muchos inmigrantes en un estado de invisibilidad y permite su explotación en condiciones de semi-esclavitud.

La misión y agenda política

La campaña tiene, entre otros objetivos, el objetivo de influir y ejercer presión para:

- Que las administraciones alojen dignamente a todos los temporeros que se desplacen a la ciudad de Lleida durante la temporada de recogida de la fruta;
- Que la subdelegación del gobierno inicie procedimientos de tramitación para la autorización de trabajo y residencia, por ser titulares de un puesto de trabajo, para todos/as los trabajadores que se encuentren en una situación administrativa irregular;
- Garantizar el acceso universal a la salud para todos/as los/as trabajadores/as involucrados/as en la campaña de recolección de frutas;
- Que los poderes públicos competentes incrementen el régimen de inspecciones laborales de los establecimientos agropecuarios de la región, e imponer sanciones por el incumplimiento de los convenios y reglamentos laborales,

en especial por la no provisión de alojamiento a los trabajadores eventuales conforme a lo dispuesto por la ley;

- Fomentar la agricultura local y eliminar el apoyo institucional a la agroindustria que no respete los derechos de los/las trabajadores/as temporeros/as y el medio natural.

El proceso participativo

Las personas que participan en la campaña son activistas de diferentes espacios de lucha política y social del territorio leridano. La participación de personas racializadas, aunque reducida numéricamente, ha sido clave a lo largo de los años para definir los objetivos, visibilizar la campaña (mediante portavoces) y para las acciones de incidencia política.

La experiencia en incidencia política

Desde su activación, los activistas de la campaña han ejercido presión ante el Ayuntamiento de Lleida y el resto de administraciones competentes para que las instituciones garanticen unas condiciones de vivienda dignas para los/as trabajadores/as. Se organizaron foros, manifestaciones y conferencias, se escribieron y difundieron comunicados de prensa y se realizaron acciones de incidencia (una lista de las principales acciones realizadas está disponible en: frutaambjusticia.wordpress.com). En 2019, el Ayuntamiento de Lleida aprueba la moción “Por una Lleida Justa. Moción de apoyo a la campaña de las personas temporeras 2019”. La plataforma aplaudió que el gobierno quisiera debatir el tema y que se reconociera que era un tema central en la agenda política local, y valoró positivamente que por primera vez el gobierno local abordara la cuestión como “un asunto laboral”, y no como un problema de “personas sin techo”. Sin embargo, la plataforma criticó profundamente al municipio, considerando la moción como una mera declaración de intenciones, no acompañada de propuestas concretas y transformadoras. Desde entonces, los/as activistas de la campaña siguen vigilando y denunciando la actuación de las administraciones al respecto: en los últimos años se ha producido una mejora parcial en las condiciones del albergue que el Ayuntamiento pone a disposición de los/as trabajadores/as, aunque está aún lejos de los estándares que se pretenden.

Stop Racisme Lloguers

[Stop Racism in Housing Rentals]

Campo de intervención: vivienda

Lugar: Olot, Cataluña.

Sitio web: www.racismelloquers.cat

La plataforma

La plataforma Stop Racisme Lloguers surgió en 2018 en los municipios de la comarca de la Garrotxa, donde se daban muchos casos de discriminación en el acceso a la vivienda, fruto de mecanismos racistas de exclusión residencial. Como consecuencia de esta situación, se realizó una primera asamblea abierta para que las personas que habían sufrido estas formas de racismo pudieran participar y colectivizar su experiencia.

Las principales necesidades sociales

La plataforma se activó como respuesta social a la necesidad de hacer frente a la discriminación racial en el acceso a la vivienda en alquiler en los municipios de la región, y más en general en Cataluña.

La misión y agenda política

Las principales líneas de actuación de la campaña son:

- Denuncia pública, para que el público conozca las violaciones de los derechos legales a las que se ve sometida una parte importante de la sociedad.
- Dar apoyo a las personas afectadas por el racismo en el acceso a la vivienda, y en el proceso de denuncia pública, ya sea por vía administrativa o en los juzgados.
- Presionar al gobierno para que cumpla con sus obligaciones legales ante la vulnerabilidad sistémica del derecho a la vivienda por motivos racistas, y en especial para que habilite mecanismos útiles, sencillos y efectivos para denunciar y corregir estos comportamientos.

El proceso participativo

La plataforma se organiza de manera asamblearia, a partir del trabajo voluntario de las personas involucradas. A las asambleas asisten personas directamente afectadas por casos de discriminación racial en el acceso a la vivienda, así como activistas de diversos movimientos sociales de la zona.

La experiencia en incidencia política

Desde su creación, la campaña ha presionado al Ayuntamiento de Olot, celebrando reuniones mensuales para que la administración implemente medidas efectivas para erradicar el racismo en el acceso a la vivienda: al respecto, cabe mencionar que en 2020 la Oficina de Vivienda del Municipio elaboró un informe legal sobre la violación de este derecho y las responsabilidades de la administración local (www.racismelloguers.cat). La recogida de datos realizada por la campaña, que ha elaborado un mapa de casos de discriminación racial en la vivienda denunciados por la ciudadanía, puede consultarse en su web (www.racismelloguers.cat).

ITALIA

ItalianiSenzaCittadinanza

[Italians without Citizenship]

Campo de intervención: derecho de ciudadanía

Lugar: Roma

Sitio web: www.italianisenzacittadinanza.org,

www.facebook.com/italianisenzacittadinanza

El movimiento

ItalianiSenzaCittadinanza (Italianos sin Ciudadanía) es un movimiento informal que nació espontáneamente desde abajo en 2016, por iniciativa de un grupo de jóvenes veinteañeros extranjeros y personas de origen extranjero residentes en varias ciudades italianas. Este movimiento nació con un objetivo muy preciso: instar al Senado a aprobar definitivamente la reforma de la Ley 91/92 sobre ciudadanía, ya aprobada por la Cámara de Diputados el 13 de octubre de 2015. Gracias a una intensa actividad de movilización online y offline, el movimiento ha crecido a lo largo de los años, estructurando una línea de actuación política colectiva altamente participativa. Este se basó en la involucración directa de jóvenes de origen extranjero nacidos o criados en Italia en la concepción y el desarrollo de las iniciativas promovidas para obtener la aprobación de la reforma, pero también para apoyar a los jóvenes italianos sin ciudadanía en los procedimientos administrativos necesarios para solicitar la ciudadanía italiana.

Las principales necesidades sociales

La necesidad social que impulsa el movimiento es garantizar los derechos de ciudadanía a miles de jóvenes extranjeros nacidos o criados en Italia, que están excluidos desde hace muchos años de la posibilidad de solicitar la ciudadanía italiana. Más precisamente, la reforma de la legislación solicitada por el movimiento tiene como objetivo facilitar la adquisición de la ciudadanía por parte de los menores extranjeros que no nacieron, pero crecieron en Italia. Tiene como objetivo también anticipar la obtención de la ciudadanía para los menores extranjeros na-

cidos en Italia; reducir el período mínimo de residencia (10 años) requerido para que los adultos presenten la solicitud; acortar el tiempo requerido para completar el trámite y derogar la norma que prevé la posibilidad de revocar la ciudadanía obtenida por residencia. En los últimos dos años, se ha transitado hacia la necesidad de vincular más la lucha ciudadana con otras campañas destinadas a cerrar los centros de detención, luchar contra el racismo institucional y contrarrestar diversas formas de discriminación interseccional.

La misión y agenda política

ItalianiSenzaCittadinanza ha redefinido gradualmente su agenda política, teniendo en cuenta los numerosos cambios que han afectado a la estructura política e institucional italiana en los últimos tres años. La lucha por la reforma de la Ley 91/92 ha estado flanqueada por iniciativas concretas para derogar las normas introducidas por la Ley 132/2018 (de extranjería y seguridad), que ampliaba la duración máxima del procedimiento de dos a cuatro años e introducía la revocación de la ciudadanía en caso de delitos de terrorismo.

El proceso participativo

El complejo desafío en el que se ha centrado el movimiento es transformar las historias individuales de injusticia y discriminación institucional vividas por jóvenes extranjeros interesados en adquirir la ciudadanía en un activo y en un objetivo político colectivo. El movimiento ha experimentado un desarrollo organizativo y una dinámica interna muy específicos. El ‘foro’ principal para el debate interno que se proporcionó inicialmente fue una sala de chat en Messenger, acopiada por algunas reuniones nacionales presenciales, generalmente celebradas junto con la organización de movilizaciones callejeras. Con el crecimiento del movimiento, se agregaron chats específicos dedicados a grupos de trabajo al chat principal. Los procesos de toma de decisiones son horizontales tanto en cuanto a las iniciativas a emprender (campañas mediáticas, cartas abiertas, promoción de políticas, iniciativas públicas, etc.) ya sea en términos de los interlocutores a involucrar (asociaciones y otros movimientos) o con quienes interactuar (medios de comunicación, actores políticos). La página de Facebook se utiliza como herramienta dinámica de seguimiento (como oficina virtual y gestión diaria de mensajes privados e informes recibidos), como canal de información interna y como medio de comunicación externa dirigido a periodistas y al mundo de la política, gracias a un uso muy eficaz de las narrativas que se presentan.

La experiencia en incidencia política

La actividad de promoción de políticas del movimiento es multidimensional e involucra iniciativas de incidencia directa para el cambio de políticas (dirigidas directamente a los responsables de decisiones políticas), movilizaciones públicas en las calles, una intensa actividad de relaciones con los medios y, especialmente después de la emergencia pandémica, iniciativas destinadas a mejorar las prácticas administrativas que regulan el procedimiento para solicitar la ciudadanía italiana. En la primera fase de desarrollo del movimiento (2016-2017), el desbloqueo de la reforma legislativa fue una prioridad. Esto se persiguió con la organización de decenas de iniciativas públicas muy concurridas frente al Parlamento, con fuerte visibilidad mediática, con una estrecha colaboración con la sociedad civil y el mundo de la educación comprometidos con la lucha por la ciudadanía, incluidos los promotores de la campaña L'Italia sono anch'io, impulsores del texto de reforma discutido en el Parlamento.

El inicio de la emergencia derivada por la pandemia centró la atención del movimiento en la necesidad de apoyar a los jóvenes extranjeros que, debido a las nuevas dificultades económicas, encontraron en el requisito de ingresos un obstáculo para acceder a la ciudadanía italiana. De ahí que se haya implementado una estrategia que buscaba alianzas con otras organizaciones (Save the Children, Tavolo Minori) para solicitar una moratoria en el requisito de ingresos. El movimiento también decidió (junto con otra asociación de jóvenes extranjeros, COONGI) la creación de una mesa de debate con algunas asociaciones que trabajan en el ámbito de la ciudadanía, y diferenciar la estrategia de incidencia política identificando objetivos a corto plazo (la mejora de algunas prácticas administrativas) y objetivos a largo plazo (la redacción de una nueva propuesta de reforma de la ley de ciudadanía). El movimiento mantiene un fuerte compromiso con la comunicación, con el objetivo de ampliar el apoyo público, tanto como sea posible, a la reforma. Por ejemplo, la campaña en línea Obiettivo Cittadinanza (Objetivo Ciudadanía), promovida en colaboración con la asociación Cittadinanzattiva, que cuenta las historias personales de algunos de los/las activistas del movimiento y comunica su condición concreta como ciudadanos italianos de manera empática e inmediata, va en esta dirección.

ASGI - Association for Legal Studies on Immigration [Anti-Discrimination Group]

Lugar: Turín

Campo de intervención: antidiscriminación

Sitio web: www.asgi.it

La asociación

ASGI es una asociación de promoción social fundada en 1990 por un grupo de abogados, juristas y académicos comprometidos con la garantía de los derechos de los inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados, ciudadanos extranjeros con residencia permanente en Italia y las personas de etnia Romaní. ASGI es un referente a nivel nacional para abogados, juristas, trabajadores sociales, asociaciones anti-racistas y organismos públicos. Gracias a una amplia red de colaboración con los despachos jurídicos de las asociaciones locales, ASGI participa activamente en la protección jurídica de los ciudadanos extranjeros, en la redacción de legislación estatal y de la UE y en la promoción de acciones contra la discriminación en el derecho civil y penal. ASGI ha hecho una contribución esencial a la eliminación de las discriminaciones institucionales tanto a nivel local como nacional.

Las principales necesidades sociales

El principio de igualdad en el acceso a derechos, servicios y trabajo guía las iniciativas antidiscriminatorias de la asociación, que actúa contra la discriminación ejercida por particulares (por ejemplo, vivienda, servicios bancarios), para garantizar el acceso a las prestaciones de la seguridad social (apoyo a la maternidad, acceso a la vivienda pública, cuidado de los niños, renta de ciudadanía) y trabajo, con especial atención a la función pública.

La misión y agenda política

ASGI pretende garantizar:

- El principio de igualdad para la integración efectiva de los ciudadanos extranjeros en la sociedad italiana y que todas las personas puedan trabajar en función de sus capacidades, y no en función del tipo de permiso de residencia que posean;
- El acceso de los ciudadanos extranjeros al empleo público, combatiendo el fenómeno de segmentación 'étnica' y 'guetizante' del mercado laboral, por el que los ciudadanos extranjeros tienden a ubicarse en los sectores más débiles, menos protegidos y más intensivos en mano de obra.

-
- El reconocimiento de la igualdad de oportunidades en el mundo laboral y la mejora de los conocimientos y habilidades de los trabajadores extranjeros.

El proceso participativo

A día de hoy, la asociación cuenta con un número limitado de socios extranjeros, pero el trato diario y las relaciones sociales y de confianza con los ciudadanos extranjeros que los socios abogados establecen en el ejercicio de su actividad profesional, facilitan la identificación de áreas prioritarias y estratégicas en las que intervenir. La mayor implicación de los ciudadanos extranjeros en las acciones de incidencia política y en actividades asociativas es una necesidad actual; hay una conciencia de que la incidencia y denuncia de la discriminación podría tener un mayor impacto si las personas extranjeras directamente afectadas estuvieran involucradas. Al mismo tiempo, ASGI señala que muchas personas afectadas por la discriminación no desean exponerse públicamente, especialmente en los medios de comunicación, y no correr el riesgo de una doble victimización.

La experiencia en incidencia política

La actividad de promoción de políticas de ASGI se expresa principalmente a nivel judicial, con la presentación de recursos antidiscriminatorios y casos estratégicos. La asociación no cuenta con ninguna figura profesional dedicada a la incidencia política ni actúa en base a estrategias de incidencia política elaboradas desde su oficina. Normalmente, la aparición simultánea en varias áreas del país de un mismo tipo de reclamación/discriminación inspira una acción de incidencia política coordinada a nivel nacional. La elección de la acción está precedida por una evaluación cuidadosa de la razonabilidad de las demandas, la posibilidad real de obtener justicia y el valor colectivo de la acción. Las iniciativas judiciales exitosas impulsadas por ASGI son muchas, pero entre las más significativas de los últimos años destacan dos casos.

El primero de ellos fue la promoción de varios recursos antidiscriminatorios, relacionados con la solicitud a ciudadanos extranjeros de terceros países (previstos en algunas resoluciones municipales y autonómicas) de acreditar la carencia de bienes en sus países de origen. Debían acreditarlo mediante la presentación de documentos originales producidos por ellos mismos para acceder a la vivienda de protección oficial o a las aportaciones en apoyo del alquiler.

Otra iniciativa se refirió a los requisitos para el acceso a determinados servicios sociales subvencionados en los comedores escolares y en los autobuses escolares (que fueron modificados tras la aprobación de una resolución por parte

del Municipio de Lodi en octubre de 2017). En este caso, a raíz de los cambios, para obtener los beneficios de la ley y no pagar la tarifa completa por el servicio de comedor escolar y transporte escolar, las familias de niños/as extranjeros/as debían presentar, además del ISEE exigido a las familias italianas, un certificado que acredite la ausencia de ingresos en su país de origen. Junto con la extraordinaria movilización de la sociedad civil, primando el de las familias de niños/as extranjeros y sus pares italianos, una campaña de promoción muy eficaz que actuó en paralelo a nivel social, mediático y legal y de solidaridad, que llevó a la eliminación de la discriminación institucional.

Trama di Terre

[Plot of lands]

Campo de intervención: antidiscriminación

Ciudad: Imola

Sitio web: www.tramaditerre.it

La asociación

Trama di Terre es una asociación intercultural de mujeres de todo el mundo. Está activa en Imola desde 1997 y fue fundada por un grupo de 14 mujeres de cinco nacionalidades diferentes, con el objetivo de acoger y construir relaciones entre mujeres autóctonas y migrantes, luchando por los derechos de autodeterminación de todos y oponiéndose a la discriminación y a la violencia machista en todas sus formas. Las principales actividades realizadas y los espacios generados a lo largo de los años son un centro intercultural, un centro de acogida para mujeres con dificultades económicas y de vivienda, un centro de acogida para mujeres víctimas de matrimonios forzados y violencia por motivos de honor, un centro contra la violencia, centros de acogida extraordinarios para mujeres solicitantes de asilo, y un centro de acogida Sprar (luego SAI-Siproimi).

Las principales necesidades sociales

Las integrantes de Trama di Terre consideran fundamental crear espacios colectivos donde mujeres autóctonas y extranjeras puedan encontrarse, intercambiar ideas, apoyarse, luchar juntas por el reconocimiento de sus derechos, prevenir y combatir la violencia de género, la exclusión social, la discriminación y el racismo. La pluralidad cultural, nacional y social del grupo y la acción colectiva se consideran los ejes fundantes de la identidad política y la misión social de la organización. Entre las prioridades identificadas en la fase actual, se encuentra en primer lugar la necesidad de superar la carencia de un enfoque político integral de género, igualdad de oportunidades de género y de origen (geográfico, cultural, social y económico). Se considera prioritaria la labor cultural y educativa para prevenir y combatir el racismo social cotidiano, que no sólo se identifica con las formas de racismo más reconocibles y sancionadas por la ley. Se necesita una política educativa pluricultural e intercultural, pero también formación de docentes y reconocimiento palpable de la pluralidad cultural de la sociedad italiana. Debería cambiar la forma en que las instituciones tienden a relacionarse con las mujeres extranjeras, así como el concepto institucional de acogida, que mantiene un sesgo asistencialista.

La misión y agenda política

Las actividades de la agenda son:

- La promoción de espacios de autonomía y participación dirigidas a la plena implementación de los principios de igualdad, dignidad social y ciudadanía de las mujeres originarias y migrantes.
- Combatir las diferentes formas de discriminación, reconociendo su interseccionalidad, que afecta especialmente a las mujeres migrantes y a las más débiles económicamente.
- Perseguir la autodeterminación y el empoderamiento de las mujeres en espacios públicos y privados.
- Luchar contra el fundamentalismo de todo tipo a través de las actividades de la asociación que combaten cualquier cultura patriarcal, ya sea italiana o extranjera, centrándose en un enfoque de género y derechos de las mujeres.

El camino participativo

La asociación se ha desarrollado gracias al tejido de relaciones entre mujeres. Trama di Terre es ante todo un refugio de hospitalidad reconocido en el territorio, que permite a las mujeres que se acercan a él encontrar cercanía afectiva, tomar conciencia de la discriminación que han sufrido, expresarse en un espacio protegido de la asociación, experimentar participación política interna y, gracias a la experiencia colectiva, ganarla a fuera. La relación se construye, sobre todo, gracias a los diferentes servicios que se ofrecen, las actividades culturales y formativas, las iniciativas políticas impulsadas por el centro intercultural y el boca a boca. La enseñanza de la lengua italiana, los albergues, el centro contra la violencia, las iniciativas políticas, la formación, pero también la cocina y la música, son los canales a través de los cuales las mujeres se encuentran y se convierten en parte activa de la asociación.

La experiencia en incidencia política

Las iniciativas de incidencia política mencionadas por la asociación son tres. La primera se refiere a la protección de las mujeres víctimas de matrimonios forzados. Trama di Terre, después de haber realizado una investigación en 2011, abrió un centro de acogida con el apoyo de la fundación Vodafone y ActionAid. Cuando finalizó el proyecto, la asociación intentó convencer al municipio para que apoyara el mantenimiento del centro, lamentablemente sin éxito. Una segunda iniciativa tuvo éxito. Después de haber solicitado durante mucho tiempo facilitar el acceso a la vivienda a las mujeres solteras con hijos (migrantes y autóctonas), en 2015-2016 la

Municipalidad cambió la forma de calcular el puntaje de acceso a la vivienda pública, reconociendo un puntaje mayor para mujeres que salen de situaciones de violencia. No es una campaña, pero una iniciativa que sin embargo parece interesante es el encuentro organizado con el Alcalde el 19 de junio de 2021, en el Día Mundial del Refugiado. Algunos/as solicitantes de asilo entregaron al alcalde una carta en la que explicaban muy claramente las barreras reales a las que se enfrentan para construir una salida del sistema de acogida que les garantice la independencia social y económica y la autonomía de los servicios sociales.

MEDU- Doctors for Human Rights

Campo de intervención: salud y trabajo

Lugar: Roma

Sitio web: mediciperidirittiumani.org

La asociación

Medici per i Diritti Umani (MEDU) es una organización humanitaria independiente sin ánimo de lucro que fue creada por un grupo de médicos, parteras y otros voluntarios involucrados en una misión de salud con las comunidades indígenas Kichwa de los Andes ecuatorianos. MEDU se estableció formalmente en 2004 en Roma con el objetivo de sanar y testimoniar, acercar la asistencia sanitaria a las poblaciones más vulnerables y, a partir de la práctica médica, denunciar las violaciones de los derechos humanos y, en particular, la exclusión del acceso a tratamientos de salud. Dentro del MEDU no existen figuras dedicadas exclusivamente a la estrategia de incidencia política.

Las principales necesidades sociales

Las prioridades políticas son la promoción de los derechos humanos en general y del derecho a la salud de los grupos de población más vulnerables en particular.

La misión y agenda política

Los temas que la asociación trata actualmente son:

- Lucha contra la explotación laboral en la agricultura;
- Promoción del acceso a la atención primaria de la salud y la salud mental para todas las personas;
- Combatir la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes.

El proceso participativo

Las personas migrantes y refugiadas a las que atienden los proyectos de MEDU participan en la acción de incidencia política a través de los testimonios directos que brindan al personal sanitario. Estos testimonios aparecen en informes públicos, comunicados de prensa y documentos dirigidos a las instituciones. Las personas migrantes/refugiadas son informadas sobre las actividades de incidencia institucional y de información hacia la opinión pública que se realizan, y aportan sus datos sociodemográficos y testimonios mediante la firma de un consentimiento informado, conscientes de que serán incluidos en informes y documentos de

promoción de políticas. En casos excepcionales, los migrantes y refugiados atendidos por la clínica móvil en asentamientos precarios participaron en reuniones institucionales y mesas redondas con instituciones locales. La implicación es difícil porque tanto el MEDU no tiene personal dedicado a esto, y porque las personas atendidas viven en condiciones sociales y de vivienda extremadamente precarias, y tienen poca representación política.

La participación y el liderazgo exigen un trabajo de información, sensibilización y organización que requiere tiempo y habilidades específicas, así como la creación de un sentimiento común, el reconocimiento jurídico y político y la identificación de temas y problemas compartidos. El primer obstáculo que encuentra MEDU para fomentar la participación directa de los migrantes/refugiados en el diseño e implementación de estrategias de incidencia política es la ausencia de una estrategia a largo plazo. Las iniciativas de incidencia política se diseñan caso por caso, sobre la base de la evidencia reunida en el terreno durante la implementación del proyecto. El segundo obstáculo es la ausencia de una figura dedicada a ello dentro de MEDU. El tercer obstáculo es la precariedad de las condiciones legales y de vida de los migrantes (debido al bajo reconocimiento socio-legal).

La experiencia en incidencia política

Las iniciativas de incidencia política se construyen esporádicamente a partir de lo que se encuentra durante las actividades de atención e información realizadas en terreno. Los coordinadores de cada proyecto comparten temas de interés con el personal y luego, con el apoyo del coordinador general y, según el caso, con los coordinadores de las mesas nacionales e internacionales, se elabora una estrategia. Una acción suele implicar un primer nivel de recolección, sistematización y procesamiento de datos, seguido de la identificación de los interlocutores políticos a nivel nacional y local, a quienes se les entregan los documentos de análisis. Paralelamente, los datos se introducen en informes públicos, que también se envían directamente a los responsables de la formulación de políticas relevantes según los problemas detectados. MEDU destaca como ejemplo el proyecto Terragiusta, una campaña contra la explotación de trabajadores extranjeros en el sector agrícola que comenzó en 2014. Esta campaña anual identifica algunas causas complejas y correlacionadas sobre las condiciones de explotación en este sector.

Primero: los mecanismos injustos en la cadena agroalimentaria (nivel de incidencia institucional: MEDU solicitó y obtuvo permiso para formar parte de la Mesa Caporalato).

Segundo: la precariedad legal de los inmigrantes (MEDU incorporó a un traba-

jador legal y en los informes analiza las condiciones legales, presentando también propuestas específicas).

Finalmente: la ilegalidad generalizada (nivel político: interlocución y participación en mesas institucionales, denuncia pública a través de informes, posts, análisis de documentos transmitidos a las instituciones pertinentes y posteriormente publicados). Los informes siempre contienen propuestas específicas dirigidas a instituciones individuales para superar los problemas identificados (en este caso: Gobierno, Región, ASP, Prefectura,

CSA EX CANAPIFICIO

Ámbito de intervención: derecho laboral y de extranjería

Lugar: Caserta

Sitio web: www.csaexcanapificio.it

La asociación

La asociación de base voluntaria “Comitato per il centro sociale” (Comité para el centro social) fue fundada en 1995, inicialmente con sede en el edificio municipal del Ex-Macello, en Caserta. A lo largo de los años, la asociación ha llevado a cabo una sostenida acción social en la zona, cuya incisividad y utilidad social y civil, es ahora reconocida unánimemente por ciudadanos e instituciones. En el mismo contexto, está el Movimiento de Migrantes y Refugiados de Caserta, que cuenta con miles de ciudadanos extranjeros y lucha por la implementación del derecho de asilo y la explotación laboral de los migrantes no regularizados, contra la Camorra y todas las formas del racismo, para la regularización de los ciudadanos extranjeros, el derecho al voto y la ciudadanía.

Las principales necesidades sociales

La asociación, con la ayuda y plena participación de los migrantes, ha puesto en marcha numerosas iniciativas culturales, sociales y recreativas para atender las necesidades del territorio y sus ciudadanos, tanto locales como extranjeros. Los objetivos básicos son fomentar el crecimiento de la conciencia crítica y la ciudadanía activa, proteger los derechos de los más débiles, promover políticas de inclusión y difundir los valores de la paz, la solidaridad y la multiculturalidad.

La misión y agenda política

A nivel nacional, la asociación:

- Lucha contra la Ley n.189/2002 denominada “Bossi-Fini”. El Ex Canapificio también hizo una contribución sustancial en la recolección de firmas y en la redacción de la ley de iniciativa popular de la Campaña “Ero straniero” (Yo fui extranjero), encaminada a reformar la legislación sobre migración y asilo, y considerada un excelente punto de partida que abarca completamente la misión de la asociación.
- Lucha contra los llamados “decretos de seguridad” y para la instauración y buen funcionamiento de la nueva institución jurídica de protección para casos especiales.

- Lucha por la promoción de una serie de acciones para el acceso igualitario a las vacunas anti-Covid 19 para los migrantes con y sin permiso de residencia, algunos de los cuales no tienen tarjeta sanitaria, no tienen código fiscal o no tienen un código de impuestos.

El Ex Canapificio forma parte del Forum Per Cambiare l'Ordine delle Cose (Foro para Cambiar el Orden de las Cosas), con el que promueve acciones conjuntas y el trabajo en red.

En cuanto a las políticas europeas, la asociación considera primordial la reforma del Reglamento de Dublín y un posicionamiento crítico sobre la estructura actual del Pacto Europeo sobre Migración.

El camino participativo

En la estructura organizativa del Centro Social, hay tanto activistas voluntarios como operadores pagados dentro del antiguo proyecto Sprar (ahora SAI-Siproimi), tanto ciudadanos extranjeros como italianos, con los mismos niveles de funciones y responsabilidades. Hay personas que se ocupan de la recepción, otras de la mesa jurídica, otras de las actividades de integración social, como la mesa de apoyo a la renta, y siempre trabajan en equipos mixtos (italianos y extranjeros). Para la asociación, este es un factor importante de participación activa e incluyente. Las prioridades en las acciones de incidencia a realizar se deciden mediante una metodología sencilla que parte de la investigación de campo, sobre todo a través de las solicitudes llevadas a la mesa, que se configura como una mesa de atención, orientación, toma de decisiones, protección legal y, sobre todo, para la lucha y la disputa. Transformar demandas individuales en luchas colectivas incentiva procesos de participación. El mayor obstáculo para la plena implicación de las personas migrantes es, sin duda, la interrupción y discontinuidad de los procesos participativos por otras necesidades prioritarias vinculadas a la vida privada, como el desplazamiento laboral, la precariedad constante o la pérdida del permiso de residencia.

La experiencia en incidencia política

El Ex Canapificio ha llevado a cabo numerosas iniciativas de incidencia política a lo largo de los años. Primero, en 2010, la asociación recordó la 'huelga indirecta' contra el trabajo informal, para denunciar públicamente la explotación laboral. Tras la huelga se inició un proceso que condujo a la elaboración de un protocolo con el Ministerio Público en 2011, que además de proteger a las víctimas de explotación sexual, finalmente incluía a las de explotación laboral.

Otra campaña importante es el Plan SVI (Plan para Personas Vulnerables y Explotadas). El Ex Canapificio elaboró tanto una campaña de comunicación como un plan de propuestas dirigidas al gobierno local y nacional. El plan contemplaba censar a las personas y apoyarlas en un proceso que las hiciera salir de su condición de “irregularidad”, gracias a un convenio estipulado directamente con el Ministerio del Interior y las Comisiones Territoriales que examinan solicitudes de asilo. El plan también preveía una especie de pacto que, tras la regularización, ofrecía la posibilidad de iniciar un curso de formación y entrar en una bolsa de trabajo. Fue un proceso institucional, que trajo sus beneficios tanto a nivel territorial como nacional, muchas veces considerado un importante ejemplo de colaboración, inclusión y resolución integral de conflictos.

Association 21 July

Ámbito de intervención: vivienda y antidiscriminación

Lugar: Roma

Sitio web: www.21luglio.org

La asociación

La asociación 21 de julio fue fundada en Roma el 6 de abril de 2010. Es una organización sin ánimo de lucro que apoya a grupos e individuos en condiciones de extrema segregación y discriminación, protegiendo sus derechos y promoviendo el bienestar de niñas y niños.

Las principales necesidades sociales

La asociación atiende a comunidades y grupos que viven en condiciones de extrema segregación habitacional a nivel urbano, protege los derechos de la niñez y trabaja tratando de intervenir sobre lo que genera y produce violaciones de derechos en el ámbito de la extrema segregación a nivel sistémico. Funciona principalmente en las afueras de Roma. Mientras que, a nivel nacional, habiendo identificado ‘campamento gitano’ como un lugar de discriminación institucional por excelencia, del que se derivan otras vulneraciones de derechos (desde el derecho a la educación hasta el derecho a la salud y al trabajo), promueve acciones de incidencia dirigidas a superar estos lugares de discriminación generalizada, en los que aproximadamente 18.000 personas viven segregadas sobre una base ‘étnica’. A lo largo de los años, la Asociación 21 de julio ha desarrollado un método que, sin ninguna connotación “étnica”, surge de un enfoque basado en los derechos y se mueve a lo largo de dos ejes. El primero se refiere a las acciones “en contexto” de las comunidades expuestas a la discriminación, con el objetivo de involucrar a los decisores políticos, los medios de comunicación y la sociedad en un cambio de perspectiva tanto en la gestión del discurso público como en las acciones políticas que influyen las condiciones de vida de estas comunidades. La segunda, se refiere a acciones “en contexto”, involucrando a miembros de comunidades que viven en situaciones de segregación y exclusión.

La misión y agenda política

La asociación:

- A nivel local, opera en el barrio Tor Bella Monaca de Roma, en el Ex Fienile centro de desarrollo educativo y cultural, un edificio gestionado por el Municipio de Roma a una ATS de la cual la Asociación 21 de julio es

líder. También ha publicado la Agenda Roma 2021, un documento de investigación dirigido a los decisores políticos sobre la futura administración municipal, con el objetivo de gestionar procesos de desarrollo de los campamentos gitanos de la ciudad bajo un calendario preciso.

- A nivel nacional, la principal acción de incidencia política está dirigida a impulsar una transición: de la mera denuncia y acción judicial al acompañamiento de los administradores hacia procesos de desarrollo de los campamentos gitanos.
- A nivel europeo, la estrategia tiene como objetivo “desetnizar” la cuestión gitana.
- En junio de 2021, la asociación definió su estrategia de incidencia para los próximos siete años, hasta 2028.

El proceso participativo

La Junta Directiva, elegida por la Asamblea General, tiene la función de ejecutar las líneas generales fijadas por la Asamblea y de promover todas las iniciativas encaminadas a la consecución de los fines sociales. Entre los miembros de la Junta Directiva hay tres personas gitanas. La asociación promueve la implicación directa del pueblo gitano y trata de lograr el éxito de sus iniciativas posicionándose en un segundo plano. La asociación, en sus acciones de incidencia, se inspira en la metodología de Organización Comunitaria de Saul Alinsky de la Escuela de Chicago, que implica una escucha activa, la identificación de líderes comunitarios y un proceso de análisis, estudio y debate sobre cómo llevar a cabo una acción de incidencia.

La experiencia en incidencia política

En 2014, en Roma, la asociación se posicionó con los habitantes de un campamento de unos cuarenta gitanos rumanos que vivían en la pobreza extrema y que libraban una batalla política contra el desalojo forzoso. La asociación apoyó a estas personas en un proceso de reivindicación de una solución habitacional alternativa al campamento. Una acción de incidencia política más reciente es la relativa al Área F, que es mucho más larga y estructurada porque duró varios meses, durante los cuales la asociación gestionó reuniones y encuentros, hubo tres manifestaciones en Roma, con muchos participantes, una carta abierta al alcalde de Roma y mucha cobertura en prensa. Finalmente, las noventa personas, que iban ser evacuadas a principios de septiembre de 2020, fueron reubicadas en viviendas municipales, gracias también a la identificación de líderes comunitarios que mediaron y apoyaron el proceso.

GRECIA

Squat – Housing support for refugees in Athens

Ámbito de intervención: Vivienda

Lugar: Atenas

El movimiento

Charalampos Tsavdaroglou escribió una serie de artículos académicos analizando y teorizando iniciativas de vivienda para refugiados promovidas por grupos anarquistas en Atenas. Su trabajo rebela muchos elementos que pueden ser interesantes para nuestro proyecto: la interacción con los refugiados, su empoderamiento en la búsqueda fructífera de un modelo alternativo de integración que fue recibido con hostilidad por autoridades gubernamentales.

Las principales necesidades sociales

Las principales necesidades sociales a las cuales respondían las iniciativas de vivienda lideradas por grupos anarquistas en Atenas fueron dos. Por un lado, querían proporcionar alojamiento, comida y un lugar donde se pudiera proteger la dignidad humana en contraposición con la situación dada en los campos a las afueras de Atenas. Por otro lado, el proyecto pretendía acercar a los refugiados a la ciudad de Atenas para facilitar su integración y su vida dentro de la núcleo urbano.

La misión y agenda política

El movimiento a la ciudad dentro de un albergue okupa es en sí mismo político ya que abre un nuevo horizonte de vida para los refugiados. De ahí la idea de empoderarlos a través de un modelo de organización horizontal que pueda construir un nuevo espacio en el que la dignidad, la solidaridad y la inclusión puedan materializarse, lejos de las limitaciones opresivas que han vivido en los campos gubernamentales. En resumen, la idea es trabajar más allá de los límites del estado-nación.

El camino participativo

La práctica de la autonomía fue muy clara en este movimiento okupa. La autoor-

ganización se practica desde el inicio. Las necesidades diarias (cocinar, vigilar las puertas del espacio ocupa, ir de compras, etc.) se organizan por siguiendo un esquema horizontal en el que los roles cambian todo el tiempo para evitar la acumulación de poder.

La experiencia en incidencia política

City Plaza en Atenas puso en práctica un proceso participatorio. Las sinergias que este proceso creó entre los diferentes grupos de personas implicadas facilitó la estructuración de un grupo heterogéneo que creó vínculos de solidaridad a través del trabajo diario en las cocinas, limpieza, etc., pero también ayudó a superar las barreras idiomáticas mediante un interesante fusión de lenguajes donde que cada grupo aprendía del otros solo para comunicarse. Pero lo más importante, City Plaza en Atenas se convirtió en un espacio de libertad y dignidad, lejos de la deshumanización institucional y la atomización de los campos, en los que los migrantes y refugiados podían volver a pensar sobre el significado de su existencia.

Lesvos Solidarity

Ámbito de intervención: Políticas migratorias y acceso al asilo

Lugar: Mitilene (Lesbos)

Sitio web: lesvossolidarity.org

La asociación

Lesvos Solidarity es una ONG griega registrada oficialmente en 2016 y nacida de la red solidaria “The Village of Altogether”, que desde 2012 comenzó a acoger refugiados en el campo de Pikpa en Lesbos. Pikpa era un campamento de verano infantil del estado abandonado y que fue cedido por las autoridades municipales a la red solidaria. Pikpa fue una iniciativa única y representó un modelo alternativo al sistema de acogida en campos administrados por el estado. Se creó un lugar de inclusión y participación activa, y el primer campo de refugiados griego abierto que creó fuertes vínculos de solidaridad. Lamentablemente, Pikpa fue desalojado en octubre de 2020 por las autoridades estatales.

Tras la entrada en vigor de la declaración UE-Turquía en marzo de 2016, el número de refugiados en Lesbos aumentó considerablemente. Por lo tanto, para responder mejor a estos desafíos y administrar mejor las donaciones, Lesvos Solidarity se fundó como una ONG oficial. Desde entonces, Lesvos Solidarity ha estado liderando acciones para apoyar a refugiados y locales, como el Centro de Apoyo Mosaik, un centro social en Mitilene que ofrece actividades y capacitaciones educativas, o el centro médico Asklipios, una clínica que ofrece servicios tanto a refugiados como locales, conectándolos con los servicios públicos y ofreciendo apoyo psicosocial y de salud. La organización realiza talleres ocupacionales para crear oportunidades laborales para refugiados y desarrollar sus habilidades; ha abierto un nuevo programa de vivienda para mujeres y para mujeres con niños/as. Finalmente, Lesvos Solidarity organiza actividades para refugiados para conectarlos con la sociedad local, y abogar por sus derechos humanos.

Las principales necesidades sociales

Lesvos Solidarity se esfuerza por asegurar el acceso a la documentación, protección y condiciones de acogida dignas, que han sido recortadas progresivamente por los gobiernos griegos tras el reconocimiento de la condición de refugiado: servicios públicos, sanidad y seguridad social. La organización también lucha para el acceso a los derechos más básicos, como alimentación, vivienda e instalaciones sanitarias, que en muchos RICs y campos del continente siguen siendo un

gran problema. En definitiva, tratan de llenar de forma integral los grandes vacíos dejados por las políticas de acogida, para mejorar así la acogida de migrantes y refugiados en un contexto muy hostil.

La misión/agenda política

Brindar espacios comunitarios de solidaridad, ofrecer una acogida y un apoyo digno para las personas necesitadas, promover la integración y abogar por los derechos humanos y una sociedad inclusiva.

El proceso participativo

Ya en Pikpa, la red solidaria trabajó para construir una comunidad dentro del campo para que los refugiados y solicitantes de asilo pudieran tomar decisiones colectivas sobre el uso del espacio, expresar sus necesidades y resolver sus conflictos por sí mismos. Muchas acciones en las que participó Solidaridad de Lesbos surgieron espontáneamente de refugiados, como las protestas en el campo de Moria en 2017, a las que la organización brindó su apoyo. Lesbos Solidarity apoya y potencia estas iniciativas espontáneas informando a las personas sobre sus derechos y sobre los riesgos a los que pueden enfrentarse, difundiendo su voz en los medios de comunicación y, en ocasiones, brindando apoyo práctico. La organización también ha incorporado a refugiados en su personal como intérpretes y mediadores culturales.

La experiencia en incidencia política

En 2017, el campo de Moria tuvo serios problemas con la alimentación, la electricidad, las instalaciones de lavado y, en general, con los servicios más básicos. Un movimiento de residentes del campo comenzó a organizarse y a protestar por estos problemas, así como a reclamar la posibilidad de viajar. De esta forma, se creó el movimiento de protesta “#open-the-islands”, que fue una iniciativa muy potente y significativa. La protesta estuvo muy bien organizada. Se originó a partir de los movimientos de base de los solicitantes de asilo y no de las organizaciones locales que pretenden hablar por ellos. Lesbos Solidarity les brindó un espacio para reunirse y discutir sus acciones al abrir el centro Mosaik. Además, también les ayudó a generar ideas, informar, difundir la voz a través de los medios de comunicación y de otras organizaciones y a participar en las protestas.

Generation 2.0

Campo de intervención: Derecho de Ciudadanía y Derecho Laboral

Lugar: Atenas

Sitio web: g2red.org

La Asociación

Generación 2.0 RED es una organización sin ánimo de lucro compuesta por personas de diferentes orígenes, en su mayoría “jóvenes migrantes de 2ª generación”. Fue fundado en 2013 con el objetivo principal de promover el establecimiento de un marco legal sobre ciudadanía para inmigrantes de segunda generación. Actualmente, este objetivo que se ha logrado mayoritariamente en Grecia, ha evolucionado para comprender el derecho a la ciudadanía de los inmigrantes en general y la residencia legal de los inmigrantes, superando los problemas que surgen durante su proceso hacia la integración. Todo esto se hace a través de acciones que implican, por ejemplo, la investigación de nuevos proyectos de ley sobre ciudadanía y residencia que se debaten en el parlamento. Realizan comentarios sobre estas leyes y sugieren propuestas para asegurarse de que la ley no esté amenazando los derechos de los migrantes, como lo hicieron con la ley 45/47, cuyo objetivo era establecer, entre otras cosas, criterios financieros estrictos para otorgar la ciudadanía griega. Además, sensibiliza sobre los problemas y obstáculos a los que se enfrentan cada día las comunidades de migrantes a través de comunicados de prensa, y trata de acercar a personas locales y migrantes a través de eventos sociales. También ofrece servicios como asesoramiento laboral, asesoramiento jurídico, mediación intercultural y educación no formal.

Las principales necesidades sociales

Generación 2.0 trabaja para promover el derecho a la ciudadanía de las personas migrantes, así como para ayudarlas a superar los obstáculos en su proceso hacia la residencia y la integración.

La misión y agenda política

La misión de Generación 2.0 es promover la participación igualitaria en una sociedad diversa y empoderar a las comunidades, promoviendo los derechos humanos, la igualdad y la diversidad, combatiendo el racismo, la xenofobia y la discriminación.

El camino participativo

El personal de la Generación 2.0 incluye muchos inmigrantes de segunda generación, pero también refugiados que trabajan como traductores. En su trabajo diario, empoderan a los migrantes y a la sociedad migrante a través de seminarios y talleres, brindándoles herramientas para conocer sus derechos y defenderlos de manera autónoma. De esta forma, les animan a formar parte activa de la sociedad y a participar en el debate político. También recopilan historias e información sobre temas de actualidad a través de sus servicios de asesoramiento legal, que luego sirven como base para las campañas de incidencia que implementan.

La experiencia en incidencia política

Debido a la pandemia de Covid19, muchos de los retos a los que se enfrenta la comunidad migrante y refugiada se dieron a conocer, especialmente en lo que respecta a los trámites para obtener permisos de residencia. Por ello, Generación 2.0 ha recogido varias historias reales de personas a las que prestaba sus servicios de asesoramiento jurídico, y ha creado un mapa interactivo en su web que recoge todos estos problemas, sintetizándolos y explicándolos al público en general de una forma simplificada. También dieron a conocer la iniciativa a través de los medios de comunicación y mostraron el mapa al Ministerio de Migración. El objetivo final era sensibilizar al público en general sobre los problemas a los que se enfrentan los migrantes en su proceso hacia la residencia en Grecia. El mapa está disponible en el siguiente enlace: g2red.org

Intercultural High School of Evosmos

Campo de intervención: educación

Lugar: Salónica

Sitio web: dge.mysch.gr

El movimiento

La escuela secundaria intercultural de Evosmos es parte de la educación intercultural formal del sistema escolar público griego. La escuela tiene clases de acogida para refugiados, donde se enseña principalmente el idioma griego después del horario escolar por iniciativa de los profesores. Los estudiantes participan en actividades artísticas conjuntas, con el objetivo de impulsar la inclusión efectiva de los estudiantes refugiados en el sistema escolar griego.

Las principales necesidades sociales

La inclusión de los niños/as refugiados en el entorno escolar y en la comunidad local en general constituye la principal necesidad social. A través de la educación y la socialización que ofrece la comunidad escolar, el objetivo principal es que los alumnos refugiados aprendan griego y se familiaricen con su nueva realidad. El abordaje sistémico de las dificultades, lograr que los padres refugiados conozcan el ambiente escolar y sus frecuentes visitas a la escuela, son parte de la política de la escuela.

La misión y agenda política

Los docentes de la escuela han entendido que la inclusión de los estudiantes refugiados en el entorno escolar es un proceso complejo que va más allá del aprendizaje de idiomas y otras materias escolares. Muchos de ellos, que vienen de la guerra, con el trauma de la pérdida y viviendo en la incertidumbre de los campos o refugios temporales, tienen necesidades que no están cubiertas por las disposiciones del mecanismo estatal griego. La prioridad de la escuela es atender estas múltiples necesidades.

El camino participativo

La escuela incluye a los alumnos refugiados en todas sus actividades paralelas, como celebraciones y espectáculos artísticos. Los estudiantes refugiados están especialmente contentos de participar en estos eventos porque sin la restricción del idioma facilita su participación. Se trata de eventos de carácter intercultural o

espectáculos de danza, donde se facilita la expresión y la participación de los estudiantes refugiados.

La experiencia de promoción de políticas

La participación en eventos y espectáculos artísticos no está prevista por el Ministerio de Educación de Grecia, sino que es una iniciativa adicional de la propia escuela. Las fiestas escolares siempre se convierten en una oportunidad de intercambio cultural, incluso en Navidad o en la celebración de aniversarios patrios.

Ejemplos de tales eventos:

- Los alumnos griegos bailaron danzas kurdas y cantaron canciones kurdas junto con los alumnos refugiados.
- Cada Navidad todos bailan un tango juntos.
- Todos participan en los espectáculos de danza, todos están influenciados por los demás, y coexisten, se ríen y se hacen amigos de verdad.

MALTA

GWU [General Workers' Union]

Campo de intervención: trabajo

Lugar: La Valeta

Sitio web: gwu.org.mt

La asociación

El Sindicato General de Trabajadores es el sindicato más grande de Malta dedicado a la protección de los derechos de los/las trabajadores/as. Su misión principal es tratar de hacer cumplir los derechos en el trabajo y proteger a los/las trabajadores/as de los abusos que a menudo cometen los empleadores.

Las principales necesidades sociales

La GWU cree en la diversidad social y en la promoción de procesos inclusivos para mantener activa la participación de todos. La diversidad cultural es un desafío muy interesante porque exige mejores servicios para todos sus miembros. El objetivo principal de GWU siempre ha sido tratar a todos los miembros por igual, sin distinción. Como organización de trabajadores, el objetivo es acoger a cualquier persona que necesite ayuda, independientemente de su sector de trabajo.

Misión y agenda política

Desde su fundación antes del final de la Segunda Guerra Mundial, la GWU y sus líderes han trabajado para mejorar continuamente las condiciones laborales del pueblo de Malta y su calidad de vida y para asegurar un futuro justo para los trabajadores.

La experiencia en incidencia política

Se contactó con el sindicato para tratar de solucionar algunos problemas que surgieron en fábricas y empresas con inmigrantes que llegaban a Malta de forma irregular, principalmente del África sahariana. El problema en cuestión estaba relacionado con la higiene de los migrantes y el mal uso de los baños comunales. El sindicato se dio cuenta de que había poca participación de los propios migrantes,

a quienes nunca se les preguntó sobre el problema. Después de una serie de discusiones, se concluyó que había diferencias culturales en el manejo de la higiene. Con una sencilla reparación, que costó unos 40 euros, los lavabos fueron remodelados para incluir una pequeña ducha higiénica, lo que permitió a los inmigrantes mantener sus hábitos.

Un caso similar ocurrió respecto a la alimentación. Dado que la mayoría de los trabajadores de las fábricas en cuestión eran musulmanes, hubo problemas causados por la introducción de jamón y queso de cerdo en la cantina. El sindicato intervino para garantizar que los trabajadores tuvieran una alimentación adecuada, sin causar problemas y ni gastos adicionales. Actualmente, el Sindicato insta a la estandarización y a la simplificación del procedimiento para obtener permisos de residencia no solo para inmigrantes indocumentados, sino también para todos aquellos que se mudan a Malta.

St Jeanne Antide

Ámbito de intervención: apoyo a personas vulnerables y víctimas de violencia doméstica

Lugar: Malta

Sitio web: www.antidemalta.org

La asociación

La Fundación St Jeanne Antide (SJAF) es una organización social registrada sin ánimo de lucro. Apoya activamente los servicios de bienestar social de las Hermanas de la Caridad de Santa Juana Antida Thouret. Su finalidad principal es prestar servicios de apoyo profesional a personas y familias en situación de vulnerabilidad y en situación de pobreza y exclusión social. La Fundación tiene como misión ser un punto de referencia y ofrecer escucha, apoyo y orientación a las personas y familias que necesitan ayuda para facilitar la recuperación de su dignidad y guiarlos hacia la autosuficiencia, la resiliencia y la realización de sus posibilidades.

Las principales necesidades sociales

- Trabajo de apoyo a la familia: crisis y dificultades familiares; problemas financieros y pobreza; desempleo y subempleo; estrés emocional; cultura heredada de dependencia de los servicios sociales; trabajo no declarado; vivienda inadecuada y desalojo; soledad; analfabetismo.
- Apoyo a la salud mental: apoyo a los cuidadores familiares de personas con enfermedades mentales - asesoramiento familiar; grupos de ayuda mutua; trabajo social; abogacía; estrés emocional.
- Apoyo a víctimas de violencia doméstica: víctimas de violencia doméstica apoyando a otras víctimas; actividades no formales basadas en el apoyo grupal, oportunidades educativas y artes de autoexpresión; abogacía; evaluación de riesgos; tutoría entre pares; establecimiento de un centro nacional para iniciativas de apoyo a las víctimas; literatura; investigaciones y publicaciones.
- Ámbito educativo: Oportunidades educativas no formales para familias vulnerables - cursos, grupos de apoyo al aprendizaje de niños/as, talleres de libertad emocional, grupos de autoestima.

La misión y agenda política

Con una visión holística de las personas necesitadas, la misión de la Fundación

es brindar un apoyo integral, cultivando un espacio para apoyar también a las familias con dificultades, extrema pobreza o precariedad. La Fundación trabaja en colaboración con asociaciones comunitarias, así como con agencias estatales y ONG nacionales. Desde 2007 lleva a cabo una labor de sensibilización en la calle como medio para identificar y extender el apoyo a familias vulnerables de difícil acceso, asistiéndolas lo más cerca posible de donde viven.

La experiencia en incidencia política

La Fundación fue la primera en Malta en iniciar un proceso de organización y acogido a las víctimas de violencia doméstica mediante la creación de un albergue que hace más de ocho años que opera y todavía funciona hoy, promovido a través de un folleto enviado a todos/as los trabajadores/as sociales y la creación de una plataforma en línea.

La fundación también actuó a nivel político, obteniendo 35 recomendaciones que sirvieron para revisar la Ley de Violencia Doméstica. Actualmente, el proyecto ha firmado un acuerdo con el gobierno que permite la financiación de dos empleados a tiempo completo que brindan tutorías entre iguales. SOAR es un servicio de violencia doméstica que trabaja para permitir a las víctimas reconstruir sus vidas con resiliencia, dignidad y bienestar. El servicio prioriza la inclusión auténtica, el apoyo entre pares, la valoración de la experiencia vivida y la justicia social. Antes de Covid, por ejemplo, se estableció un club los sábados donde 30 mujeres y sus hijos se turnaban para apoyarse y ayudarse mutuamente, enseñándose habilidades y creando eventos comunitarios. Muchas de ellas eran inmigrantes.

Bibliografia

- Alinsky S., 2020, *Radicali, all'azione! Organizzare i senza-potere (Reveille for Radicals)*, Edizioni dell'Asino.
- Amnesty International, 2018, *Body politics. The criminalization of sexuality and reproduction. A campaigning toolkit*, available at: <https://www.amnesty.org/en/documents/pol40/7764/2018/en/>
- Antigone, 2021, *Social priorities, participation, and advocacy practices. The experience of 23 Greek antiracist realities*, available at: <http://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/BABI-SOCIAL-PRIORITIES-PARTICIPATION-ADVOCACY-PRACTICES-IN-GREECE.pdf>
- Arendt H., 1973/2004, *The Decline of the Nation-State and the End of the Rights of Man*. In *the Origins of Totalitarianism*, Shocken Books.
- Asgi, Moria: la colpa è della politica Ue, non dei rifugiati, 2020, qui: <https://www.asgi.it/notizie/moria-colpa-della-politica-ue-non-dei-rifugiati/>
- Asgi, *Le criticità del patto europeo migrazione e asilo alla luce del contesto italiano*, gennaio 2021, disponibile qui: <https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/criticita-patto-europeo-migrazione-e-asilo-contesto-italiano/>
- Canadian Community Economic Development Network (Ccednet), 2003, *The Art of Advocacy A Handbook For Non-Profit Organizations And Charities*, available at: https://ccednet-rcdec.ca/sites/ccednet-rcdec.ca/files/art_of_advocacy_en_online.pdf
- Care International, 2014, *The Care International Advocacy handbook*, available at: <https://www.care-international.org/files/files/Care%20International%20Advocacy%20Handbook.pdf>
- Central European University (Hungary), University of Vienna, University of East London, European Network Against Racism, 2018, *Advocacy Handbook. Refugees' access to higher education and beyond*, available at: https://www.enar-eu.org/IMG/pdf/reis_advocacy_handbook.pdf
- Civicus and others, 2015, *Advocacy toolkit influencing the post-2015 development agenda*, available at: http://civicus.org/images/stories/SD2015%20Post-2015%20Advocacy%20Toolkit_FINAL.pdf
- Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni, Un'Unione dell'uguaglianza: il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025, 18 settembre 2020, disponibile qui: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/a_union_of_equality_eu_action_plan_against_racism_2020_-2025_it.pdf
- Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, disponibile qui: <https://ec.europa.eu/>

- De Toma C., 2020, *Advocacy Toolkit, Advocacy Toolkit. Guidance on how to advocate for a more enabling environment for civil society in your context*, Open Forum for CSO Development Effectiveness, available at: <https://sinapse.gife.org.br/download/advocacy-toolkit-guidance-on-how-to-advocate-for-a-more-enabling-environment-for-civil-society-in-your-context>
- De Santis G., 2010, “Voices from the Margins: Policy Advocacy and Marginalized Communities”, in *Canadian Journal of Nonprofit and Social Economy Research*, Vol. 1, No 1 Fall/ Automne, pp. 23 – 45.
- Education International, 2018, *Promoting integration of migrants and refugees in and through education*, available at: https://issuu.com/educationinternational/docs/toolkit.en_interactif.
- Favilli C., “Il diritto dell’Unione europea e il fenomeno migratorio”, in Zorzella N., Giovannetti M. (a cura di), *Ius Migrandi*, Franco Angeli, 2021.
- Gen S., Wright A. C., 2018, “Strategies of policy advocacy organizations and their theoretical affinities: Evidence from Q-methodology”, *Policy Studies Journal*, 46 (2), pp. 298-326.
- Gen S., Wright A. C., 2012, “A framework for policy advocacy”, *Faculty of Social Sciences – Papers*, 955, pp. 4-5.
- Global protection Cluster, GBV Prevention and Response, 2014, *Gender-based Violence in Emergencies, Advocacy Handbook*, available at: <https://www.refworld.org/pdfid/5c37019b7.pdf>
- Lombardi E., Messina A., Polimanti O., 1999, *Lavorare bene. Manuale sull’organizzazione e le forme di lavoro nel terzo settore (Working well. Handbook on organization and forms of work in the third sector, ed)*, Edizioni lavoro.
- Lo Schiavo L., 2009, “Immigrazione, cittadinanza, partecipazione: le nuove domande di inclusione nello spazio pubblico. Processi di auto-organizzazione e partecipazione degli immigrati (Immigration, citizenship, participation: new demands for inclusion in public space. Processes of self-organization and participation of immigrants, ed)”, Department of Cognitive, Psychological, Pedagogical Sciences and Cultural Studies (COSPECS), University of Messina, *Quaderni di intercultura I/2009*.
- Lunaria, 2021, *Social priorities, participation, and advocacy practices. The experience of 20 Italian antiracist realities*, available at: <http://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/BABI-SOCIAL-PRIORITIES-PARTICIPATION-ADVOCACY-PRACTICES-IN-ITALY.pdf>
- Lunaria, Adice, Antigone-Information and documentation center on racism, ecology, peace and non-violence, Grenzenlos, Kisa e SOS Racisme, (cura di), *Words are stones. Analisi dell’hate speech pubblico in sei paesi europei*, 2019, disponibile qui: <http://www.cronachediordinariorazzismo.org/report-internazionale/>
- MacIndoe H., 2014, *How Competition and Specialization Shape Nonprofit Engagement in Policy Advocacy*, Nonprofit Policy Forum.

BIBLIOGRAFÍA

- Mantovan C., 2007, *Immigrazione e cittadinanza. Auto-organizzazione e partecipazione dei migranti in Italia (Immigration and Citizenship. Self-organization and participation of migrants in Italy, ed)*, FrancoAngeli.
- Mosley J., 2013, “Recognizing New Opportunities: Reconceptualizing Policy Advocacy in Everyday. Organizational Practice”, in *Social Work*, Volume 58, Issue 3, July 2013, pp. 231–239.
- Naletto G. (a cura di), *Rapporto sul razzismo in Italia*, Manifestolibri, 2009.
- Pugliese E., “Gli immigrati nel mercato del lavoro e i modelli regionali di inserimento”, in Carchedi F. (a cura di), *La risorsa inaspettata*, Ediesse, 1999
- Pugliese E., (a cura di), *Rapporto immigrazione*, Roma, Ires - Ediesse, 2000.
- Ribera Almandoz, O. Delclós, C. Garcés Mascareñas. B., 2020, *Casa nostra, casa vostra? Condicions i trajectòries d'accés a l'habitatge de sol·licitants d'asil i refugiats a Catalunya*, Barcelona, CIDOB.
- Refugees Support Aegean, The “hotspots” experiment: removing human rights from the equation, 2018, disponibile qui: <https://rsaegean.org/en/the-hotspots-experiment/>
- Reisch M., 2002, “Defining Social Justice in a Socially Unjust World”, in *Families in Society: The Journal of Contemporary Human Services*, Vol. 83, N. 4.
- Rivera A., voce “Razzismo”, in: UTET, *Diritti umani. Cultura dei diritti e dignità della persona nell'epoca della globalizzazione*, 6 voll., 2007.
- SOS Malta, 2021, *Social priorities, participation, and advocacy practices. The experience of 15 Maltese antiracist realities*, available at: <http://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/BABI-SOCIAL-PRIORITIES-PARTICIPATION-ADVOCACY-PRACTICES-IN-MALTA.pdf>
- SOS Racisme, 2021, *Social priorities, participation, and advocacy practices. The experience of 20 Spanish antiracist realities*, available at: <http://www.cronachediordinariorazzismo.org/wp-content/uploads/BABI-SOCIAL-PRIORITIES-PARTICIPATION-ADVOCACY-PRACTICES-IN-SPAIN.pdf>
- Sprechmann S., Pelton E., 2001, *Advocacy Tools and Guidelines Promoting Policy Change*, CARE, available at: https://onthinktanks.org/wp-content/uploads/2016/01/CARE_Advocacy_Guidelines.pdf
- UNICEF, 2010, *Advocacy Toolkit. A guide to influencing decisions that improve children's lives*, available at: <https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/UNICEF%20Advocacy%20Toolkit.pdf>.
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development. The 17 Goals, available at: <https://sdgs.un.org/goals>
- Urbán M., 2019, *La Emergencia de Vox. Apuntes para combatir la extrema derecha española*, Barcelona, Sylone/Viento Sur.
- WHO, *Human rights and health, Key facts*, available at: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health>

Better Advocacy for Better Inclusion

Acciones contra la discriminación, para la igualdad y los derechos de ciudadanía

Better Advocacy for Better Inclusion. Acciones contra la discriminación, para la igualdad y los derechos de ciudadanía ha sido producido en el marco del proyecto Better advocacy for Better Inclusion (BABI) financiado por el programa Erasmus+ . El proyecto tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las capacidades de activistas nacidos en el extranjero y autóctonos para orientar políticas públicas de inclusión social de personas migrantes, refugiadas y racializadas.

Este manual recoge los principales resultados de una investigación cualitativa, en la que participaron 78 organizaciones/iniciativas/redes (asociaciones de inmigrantes, refugiados y ciudadanos de origen extranjero, asociaciones no gubernamentales, comités informales, campañas y grupos informales) activos en Italia, España, Grecia y Malta en la lucha contra la discriminación y en la promoción de los derechos de ciudadanía de los inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados, ciudadanos de origen extranjero, y las personas romaníes.

La Parte 1 ofrece algunas nociones teóricas básicas sobre la incidencia política.

La Parte 2 presenta los resultados del estudio empírico y proporciona recomendaciones útiles para estructurar mejor las iniciativas de incidencia política que tienen como objetivo promover la igualdad, la justicia social, un nuevo modelo de ciudadanía y de gestión de la migración, así como luchar contra la discriminación, la xenofobia y el racismo.

La Parte 3 presenta algunos ejemplos concretos de incidencia política promovidos en España, Italia, Grecia y Malta.

Página web del proyecto:

www.cronachediordinariorazzismo.org/babi-better-advocacy-better-inclusion

